

Mujeres tras el telón de la guerra

Mujeres tras el telón de la guerra

**Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres
ONU Mujeres**

Belén Sanz
Representante País

Silvia Arias
*Coordinadora del Programa Mujeres,
Paz y Seguridad*

Maria Reyero
Responsable de comunicaciones

Fundación Ideas para la Paz -FIP
María Victoria Llorente
Directora

VerdadAbierta.com
Juan Diego Restrepo E.
Director/Editor

Periodistas:
María Clara Calle Aguirre
Tatiana Navarrete Guzmán
Ricardo Cruz Baena
Andrés García Castiblanco

Fotografías:
María Clara Calle Aguirre
Tatiana Navarrete Guzmán
Ricardo Cruz Baena
Andrés García Castiblanco

Fotografía de portada:
Andrés García Castiblanco.

Diseño y digramación:
Bibiana Moreno Acuña
<https://bibianadisenio.wordpress.com/>

Impresión:
Gráficas Ricaurte

*Esta publicación fue posible gracias
al apoyo de la Embajada de Suecia
en Colombia*

Bogotá, Colombia
Noviembre 2016.

Contenido

Introducción

8

Coca: un negocio familiar
que marca a la mujer

20

Mujeres, las víctimas silenciosas
de la esmeralda en Boyacá

36

Las chatarreras, cara femenina
de la minería en Segovia

50

‘Matamberas’, la red que sostiene
la identidad afro de Timbiquí

64

Puerto Santander, en la ruta
de ‘las bachaqueras’

Introducción

No era una tarea sencilla. Se trataba de visitar varias zonas de confrontación armada en el país y descubrir en ellas historias que resaltarán a las mujeres en su condición de líderes sociales y trabajadoras en medio de condiciones adversas y destacar sus estrategias de resistencia ante los embates de grupos guerrilleros, narcotraficantes y bandas criminales, y en medio del abandono del Estado. Se seleccionaron para ese fin los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Putumayo como lugares donde se expresan esas conflictividades y también donde se resiste con valor.

Inicialmente la meta fue llegar a varias regiones de Putumayo y observar las consecuencias de la siembra de hoja de coca para uso ilícito. Allí se encontró un grupo de mujeres valientes que le hacen frente a los fenómenos que se derivan de esa actividad ilícita y tratan de buscar soluciones para que cada vez menos personas se involucren en ella.

Cuenta María Clara Calle, la periodista que desarrolló este reportaje, que el trabajo de campo en varias regiones putumayenses le permitió conocer “cómo realmente las redes de organizaciones, especialmente de mujeres, han funcionado en el departamento no solo para dar una mirada de género y atender a las mujeres víctimas, sino para liderar procesos de resistencia de todas las comunidades, incluyendo también a los hombres, a los indígenas, a los campesinos y a los afros”.

Pero lo que más impactó a María Clara, según ella mismo lo expresa, es “cómo las personas del Bajo Putumayo han soportado una violencia tan macabra, llena de tanta sevicia y, además, han logrado organizarse para superar el dolor que les causaron los grupos armados. Todo sin dejar de lado que la huella del conflicto permanece en esta subregión del departamento”.

El siguiente destino fue el occidente de Boyacá, una región donde la búsqueda de esmeraldas ha marcado por décadas la vida de sus pobladores. En un mundo de “patrones”, de violencias explícitas e implícitas, de guerras intensas y de acuerdos de paz constantes, las mujeres no son tan visibles. A esa región llegó la periodista Tatiana Navarrete con el fin de rescatarlas de su invisibilidad y contar lo que pasaba con ellas.

“En la investigación previa a mis viajes a Muzo y a Coscuez encontré muy poca información sobre las mujeres que viven de la mina”, cuenta Tatiana, pero ya en el terreno la realidad mostró una situación distinta. “Me sorprendió la disposición de las guaqueras, de las trabajadoras de

los campamentos y de las viudas para compartir sus historias de vida y la sensación compartida de ser una voz acallada en un negocio que es dominado por hombres”.

Los recorridos por la región, llevaron a esta periodista a palpar de primera mano la realidad que subyace en esta región y su conclusión es dolorosa: “Los hermosos paisajes y las montañas de esa región contrastan con la pobreza. Lo que sucede cada mañana en la mina es un fiel reflejo de la situación. Cientos de hombres y mujeres (muchas mujeres, porque no tienen más opciones de trabajo) llegan en la madrugada a esperar, durante horas, las sobras de tierra que les entregan las empresas. Ante un Estado desentendido, están solos en la pelea por conseguir un ‘pucho’ de tierra. Están solos en su pelea para ganarle la guerra al hambre”.

Andrés García, otro de nuestros periodistas, tenía como tarea visitar el municipio de Timbiquí, en el departamento de Cauca. No fue fácil tampoco. Se hicieron varios intentos, pero las comunicaciones no son las mejores y las condiciones de seguridad tampoco, por cuanto tuvo que esperar varios meses hasta lograr las conexiones necesarias para llegar a la población. Una vez logró arribar al lugar y contactar a las mujeres que lo ayudarían en su labor, comenzó una experiencia periodística cargada de aprendizajes.

“Compartir con ‘Las Matamberas’, escuchar sus historias, verlas trabajar y recorrer el río Timbiquí en medio de la depredación de la minería ilegal y del abandono estatal, me permitieron conocer realidades que pasan desapercibidas en los afanes de la cotidianidad y de las agendas informativas de la gran prensa”, afirma Andrés.

‘Las Matamberas’ es un lindo y sonoro nombre que hace referencia a las mujeres que pertenecen a la Red de Organizaciones Femeninas del Pacífico Caucaño Matamba y Guasá, que adopta los nombres de instrumentos musicales del Pacífico colombiano, y que está compuesta por 22 organizaciones comunitarias que trabajan conjuntamente y les hacen frente a las adversidades. Dice Andrés que a través de algunas de sus integrantes descubrió “el valor y la lucha titánica que libran esas mujeres afrocolombianas, quienes, en medio de la pobreza, del machismo y del peso de los fusiles, trabajan sin descanso para lograr el bienestar de su comunidad y la protección de su cultura”.

En su relato de la experiencia, Andrés destaca que el trabajo de campo estuvo lleno de dificultades, “como las habituales de comunicación y de orden público, pasando por un simulacro de un tsunami, las cuales fueron sorteadas gracias al apoyo incondicional de la profesora Mirna Rosa Herrera, a quien nunca dejaré de estar agradecido por todo su acompañamiento. Al final, mi libreta de apuntes salió con más preguntas que respuestas”.

Y preguntas también son las que tiene Ricardo Cruz, el integrante de nuestro equipo que tenía la responsabilidad de buscar las historias en dos duras regiones agobiadas por el conflicto armado y las actividades ilegales: Segovia, en el nordeste de Antioquia, y el Bajo Baudó, en Chocó. El primer propósito se logró, pero con muchas dificultades, pues esa población es un territorio bajo control armado ilegal y cualquier desconocido es sospechoso, por lo que se tuvo que gestionar con las mismas comunidades las garantías de seguridad.

A donde no se pudo viajar fue al Bajo Baudó. Pese a múltiples intentos y a buscar apoyo interinstitucional, las difíciles condiciones de orden público no permitieron que Ricardo viajara con la protección requerida para estos casos, por lo que tuvimos que abandonar este propósito.

Nos queda la frustración de no poder hacer trabajo de campo en esta región tan olvidada de todos y tan controlada por grupos armados ilegales. Nos quedamos con muchas preguntas por resolver. ¿Qué está pasando allá que es tan difícil entrar? ¿Qué angustias padecen las comunidades? ¿Y las mujeres, a qué se enfrentan?

Para superar ese escollo, decidimos cambiar de región y explorar la frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Para ello escogimos el municipio de Puerto Santander, en Norte de Santander. Hasta allá fue Ricardo y se encontró con el rostro femenino del contrabando, 'las bachaquetas', cuya labor es pasar mercancías de un lado a otro de la línea que divide a los dos países. Su vulnerabilidad es aterradora.

Al reflexionar sobre su experiencia en este proyecto, Ricardo expone su sorpresa: "Quién imaginaría, por ejemplo, que abordar un tema ampliamente divulgado, contado e investigado como la minería del oro en Segovia o el contrabando en la frontera colombo-venezolana, pero desde la mirada de las mujeres permitiría conocer otro tipo de realidades, afectaciones y dificultades frecuentemente invisibilizadas por el flagelo del conflicto armado. Esas realidades quedaron plasmadas en este esfuerzo periodístico que busca resaltar la resiliencia, la fortaleza y el carácter de mujeres que día a día deben afrontar realidades con males sociales enquistados desde hace tiempo".

Pero sus consideraciones fueron más allá y planteó varias inquietudes que tienen que ver con nuestro papel en la sociedad: "¿Cómo hacen los periodistas para seleccionar sus noticias? ¿Qué hace que una situación absolutamente cotidiana se potencie como una gran historia? La verdad, no existe una respuesta única, integral, general o contundente. Y es, quizás, el enigma y la magia que a veces esconde el periodismo: encontrar historias dignas de divulgar masivamente allí donde todos ven solo hábitos y costumbres consuetudinarias"

Y justamente eso que describe Ricardo es lo que impulsó a *VerdadAbierta.com* a aceptar el reto planteado por ONU Mujeres Colombia y que hoy presentamos en este libro, que ponemos a su consideración, como un aporte de nuestro equipo a la reflexión de este país, que tanto nos duele.

Agradecemos infinitamente a todas las mujeres, y también a algunos hombres, que acompañaron a nuestros periodistas en terreno, no solo ofreciéndoles información sino protegiéndolos, para que no tuvieran ningún tropiezo en su labor. Por su seguridad, es deber nuestro omitir sus nombres.

También le damos las gracias a la Fundación ideas para la Paz (FIP), nuestra aliada incondicional, que nos acompañó en la gestión de cada viaje, y a Revista SEMANA, otro de nuestros soportes, que, a través de su versión online, *Semana.com*, contribuyó a la visibilización de esta aventura periodística, que concluyó satisfactoriamente.

Juan Diego Restrepo E.

Director/editor VerdadAbierta.com

Bogotá, 22 de noviembre de 2016



Coca:

un negocio familiar
que marca a la mujer

Plantaciones extensivas de esta mata, la guerra y la violencia sexual han pasado por Putumayo con más que sangre para las organizaciones femeninas.

Por: María Clara Calle



En Putumayo la siembra de hoja de coca fue un negocio de toda la familia. Los hombres se iban en el día a cosechar, a raspar las matas. Cuando éstas se cargaban a tope y el cultivo era muy extenso, contrataban a los conocidos 'raspachines' o cosechadores, para no perder nada. Esposas e hijos se involucraban y en la misma casa hacían la primera etapa del proceso para sacar la pasta y ganarle diez veces más que vendiendo la hoja solamente.

“

El hombre es más de temple, pero la mujer rinde más”, dice Cindy, una comerciante de*

La Hormiga y esto se explica mejor con las palabras de Lady*, quien vivió de la coca muchos años en el Valle del Guamuez: “*en mi casa, yo cosechaba doce arrobas de hoja por día mientras que mi hombre solo ocho*”.

Además, ellas explican que la mujer es mucho mejor para “cortar” la coca, que es uno de los últimos momentos de la producción de la pasta en la que se le echa ácido. Según Cindy, las mujeres lo hacen mejor porque “*tienen más estilo, más delicadeza y ‘bailan’ mejor*”.

En el Putumayo de los años ochenta y noventa no era extraño encontrar extensiones inmensas de hoja de coca en las fincas de los campesinos. Para ellos no era delito, sino una forma de vivir, la única a la que los obligó el Estado. En esa época, la bonanza de la quina, el caucho, la madera y del petróleo ya eran cosa del pasado.

“ ”

EMPEZAMOS A COSECHAR SIN QUERER HACERLE DAÑO A NADIE, PERO COMO NO HABÍA VÍAS DE ACCESO, MIRAMOS LO RENTABLE QUE ERA LA COCA PORQUE ERA MÁS FÁCIL DE TRANSPORTAR.

Sonia, habitante del corredor Puerto Vega - Teteyé, que comunica a Puerto Asís con Ecuador.*



En Putumayo los campesinos sostienen que ellos son el eslabón más débil de la cadena; aunque invierten en plaguicidas, pasan semanas enteras cosechando y ganan cerca de millón y medio de pesos por cada kilo de pasta de coca, son las mafias las que la convierten en cocaína y se quedan con toda la ganancia. Además, la gente es la que más cargó con la violencia.

Y no solo eso, la familia misma cambió, todo giraba en torno a la coca. En tiempos de cosecha, hasta los menores de edad dejaban la escuela con la aprobación de algunos profesores, como lo recuerda Xiomara*, una joven que en los tiempos del auge cocalero tenía 9 años y estudiaba en una vereda de San Miguel.



Puerto Colón ha sido uno de los lugares más golpeados por el conflicto en Putumayo. Foto: Cortesía Alianza Tejedoras de Vida.

condiciones en las que están detenidas las mujeres, que propicia toda clase de abusos. Esta lideresa explica que es un fenómeno invisible, en parte por la reticencia de los consulados colombianos.

“En las visitas que hacemos ninguna mujer se me ha acercado a hablarme de vejámenes”, responde Cáceres. Lo que sí ha conocido es casos de aislamiento, maltrato, golpes y en algunas ocasiones, falta de atención médica, en los reclusos hombres. “Si pasa, ¿por qué no le dicen eso al cónsul? Nosotros buscamos solución mediante la oficina de derechos humanos de la cárcel, hacemos canal con la Embajada en Quito y solicitud de aclaración al Ministerio de Justicia”, asegura el funcionario.

La mayoría de capturadas caen en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Una vez detenidas, tienen que estar en la cárcel masculina que hay allí mientras las trasladan a algún penal mixto en las ciudades de Macas o Archidona.

Detenidas en Ecuador

Uno de los dramas en Putumayo que impacta a las familias por cuenta del negocio del tráfico de drogas es el de las detenciones de las mujeres. Las cuentas de Jorge Cáceres, cónsul de Colombia en Nueva Loja, Ecuador, son de 187 colombianos hombres y nueve mujeres detenidas en las cárceles ecuatorianas en las que él tiene jurisdicción. Por su parte, en 2014, el Parlamento Andino constató que en el penal de Ibarra había 15 mujeres y 60 hombres reclusos, mientras que en Quito hay 50 mujeres sentenciadas y 24 procesadas, el 90% de ellas por tráfico de drogas.

El río San Miguel abarca casi toda la frontera entre Colombia y el país vecino. El paso oficial es por el puente internacional, pero llegar al otro lado es tan fácil como atravesar el río en canoa. Además, el tránsito es algo común para las personas que trabajan o van de compras; incluso, algunos niños colombianos atraviesan diariamente la frontera para estudiar allí.

Esa cotidianidad y la extensión de la frontera hace que sea difícil

registrar todo lo que entra y sale, pero las requisas se mantienen y en ellas han caído mujeres transportando droga en fajas, mochilas y en cargas de plátano y panela, lo que genera un drama para sus hijos. Una institución educativa de ese municipio le reportó a la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida que había cerca de 70 niños solos en los colegios o con sus abuelos porque sus madres están detenidas en Ecuador o en Colombia.

“En este año tuvimos el caso de una pareja capturada que dejó dos menores de edad. Ellos estuvieron unas semanas en un centro de La Dinapen, que es como el Bienestar Familiar en Ecuador, y luego se los entregamos a sus abuelos en Colombia”, detalla el cónsul.

Lo que más le preocupa a Fátima Muriel, presidenta de la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida, son las

“ ”

POBRES MADRES RECLUSAS, ALGUNAS POR GANARSE CUALQUIER PESO PARA DAR DE COMER A SUS HIJOS CON EL TRÁFICO ILEGAL, MIENTRAS LOS QUE LAS MANDAN ESTÁN TRANQUILOS EN LAS CALLES ENVIANDO MÁS COCA CON OTRAS POBRES VÍCTIMAS. A ESTOS ES QUE DEBEN PERSEGUIR Y CASTIGAR.

sugiere Muriel.

Plan Colombia no cumplió

Fue tanto el auge que Putumayo “reinó como el epicentro de la producción de cocaína en el comercio global entre finales de los 80 y mediados del 2000”, según el informe ‘Narcotráfico: mujeres en la sombra y su impacto oculto en la vida de las mujeres en América Latina’, del Fondo de Acción Urgente América Latina. Y fue precisamente por esto que Estados Unidos fijó su mirada en el departamento.

Las primeras fumigaciones aéreas con glifosato se hicieron en 1994 y se consolidaron a partir del 2000 con el Plan Colombia, un programa de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la lucha contra las drogas en el país y que terminó apoyando la guerra contrainsurgente. Esta estrategia prometía beneficios a cambio de dejar de sembrar hoja de coca, como apoyos en ganadería, silvicultura, siembra de cacao, caucho o pimienta.

Al mismo ritmo que pasaban las avionetas asperjando con glifosato, se disparó la capacidad de las mujeres de organizarse. “Ellas empiezan a hablar de sus trabajos en las fincas, alrededor del cultivo de la hoja de coca, y de la afectación en la salud de sus familias por las fumigaciones”, cuenta Amanda Camilo, coordinadora regional de la Ruta Pacífica de Mujeres, quien evoca la primera gran marcha de mujeres en Putumayo, el 25 de noviembre de 2003, que tuvo como lema “Fumigación es igual a miseria”.



*Estos datos fueron recopilados con varias mujeres de Putumayo.



**NO HAY ESTABILIDAD
ECONÓMICA PARA EL
CAMPESIÑO, EN GRAN PARTE
POR LA FALTA DE CARRETERAS.**

Mujer de Puerto Guzmán, Putumayo.

Esta lideresa también recuerda que el Plan Colombia trajo un “componente productivo que fue lesivo”. Las personas tenían que asociarse formalmente para recibir los recursos económicos internacionales, lo que hizo que muchas de las organizaciones, incluyendo algunas de mujeres, se endeudaran para obtener los registros de la Dian y la Cámara de Comercio.

En los papeles quedó consignado que además de dar dinero, el Plan Colombia fortalecería a los productores para que manejaran sus cosechas de manera eficiente y gestionaran ellos mismos el desarrollo en las veredas, pero muchas veces la plata la entregaron sin hacer pedagogía y “la gente se quedó con los trapiches o las construcciones de cría de cerdos, pero sin trabajarlos y encima, endeudados”, cuenta Amanda, pero quedó su gran capacidad de organización.

Por otra parte, los que lograron cosechar con los recursos norteamericanos, tenían que transportar sus productos por las mismas vías y trochas que lo habían hecho siempre y esto implicaba, muchas veces, perder dinero.

En el centro de la vorágine sexual

A la par que la mata de coca se esparcía por todo Putumayo en los ochenta, surgían en todos los municipios y veredas del Bajo Putumayo ‘chongos’ de todo tipo, es decir, centros de prostitución.

“Puerto Asís era un mundo distinto al de Mocoa. Había opulencia, muertos diarios, prostitución. Tanto que de niño oía hablar de ‘Brasilia’, un prostíbulo del puerto famosísimo en los ochenta”, recuerda Guillermo Rivera, hoy viceministro del Interior y quien por más de una década fue representante a la Cámara por Putumayo.

En Puerto Colón se llegaron a contar hasta cuatro ‘chongos’, cuando no había más de 3.000



Este es uno de los 'chongos' que todavía existen en La Hormiga, la cabecera municipal de Valle del Guamuez.

Foto: Cortesía Alianza Tejedoras de Vida.

habitantes. En San Miguel el más famoso era Happy Night, mientras que las cuentas de Omaira* es que en la vereda Los Achapos, de Puerto Asís, había por lo menos cuatro, uno de esos era de ella. Todos llegaron de la mano de los narcotraficantes y los primeros se vieron en 1979, según el informe de CNMH sobre El Placer.

“No llegaba cualquier mujer. Eran muy bonitas, traídas de Cali, Medellín, Pereira, Huila y hasta Ecuador; venían un fin de semana, se iban con pesos colombianos y los cambiaban por sucres que valían menos”, cuenta Cindy, quien habla de por lo menos 11 bares solo en El Placer.

Para que la Policía las dejara trabajar en 'los chongos', se tenían que hacer exámenes médicos semanalmente. Sólo en La Dorada, que es la cabecera municipal de San Miguel, se registraban de 20 a 30 mujeres.

Con lo que tenían que tener más cuidado era con los controles de la guerrilla, que prohibía la prostitución en algunas veredas e, incluso, a veces se llevaron a las mujeres, como sucedió en el 'chongo' que manejó Omaira.

Esta mujer sabe que los guerrilleros abusaron sexualmente de algunas de sus trabajadoras. Incluso, una de ellas quedó en embarazo. Sin embargo, hoy no se conoce a ciencia cierta si era una práctica generalizada en las filas insurgentes. La mayoría de las lideresas afirman que las Farc sí reclutaban a menores de edad muy bonitas, pero que varias que luego salieron de las filas explicaron que jamás un comandante violaba a una mujer.

Claro que no todas sobrevivieron. Dos sobrinas de Elizabeth Mueses, una lideresa social de El Pacer, fueron reclutadas por esta guerrilla cuando eran menores de edad y

con el tiempo sus familiares las encontraron muertas.

Por su parte, Soledad* sostiene que cuando fue guerrillera supo que algunos comandantes que operaban en Valle del Guamuez mandaban a llamar al monte a las mujeres que les parecían bonitas y si ellas no accedían a tener una relación sexual o amorosa con ellos se tenían que ir del pueblo.

Xiomara, por el contrario, afirma que un guerrillero la defendió de un joven que la miraba mucho cuando ella era adolescente en San Miguel y Elizabeth Mueses aclara que antes de la llegada de los paramilitares, la guerrilla intervenía en los asuntos familiares.

“Alias ‘Garganta e’ Lata’, que le decían Henry, ayudaba a defender los derechos de mujer y hasta las

defendía cuando en los hogares las trataban mal”, agrega Elizabeth y pone como ejemplo, lo que le ocurrió cuando tenía 19 años. En esa época, las Farc le entregaron a ella y a su amiga Matilde Guerrero dos niños para que los llevaran a Bienestar Familiar mientras que ellos se iban con un hombre que le había pegado a su esposa. Ella le pidió a Henry que pensara en los niños y luego de conversar con los implicados y de que el hombre se defendiera diciendo que la mamá era muy descuidada con los hijos, los guerrilleros decidieron enviarlos a la casa para que se perdonaran.

Rivera asegura que buena parte de violencia contra las mujeres pasó desapercibida entre los años ochenta y noventa porque ni la gente ni las instituciones tenían claridad sobre qué significaba y, además, no era fácil denunciar por cuanto era una zona controlada por las Farc.

Lo que sí admite este funcionario es que se empezaron a conocer relaciones amorosas entre soldados y menores de edad en zonas rurales y urbanas a principios del 2000, cuando el pie de fuerza pasó de 2.000 a 10.000 hombres en armas por el Plan Colombia.

Militares: abusos por reconocer

“En el batallón que hubo en la Hormiga, las niñas se colgaban de las rejas esperando a que los militares les dieran un pico y también se conocen casos de que violaban mujeres cuando salían al campo”, relata Cindy.

La situación fue tal que una docente del colegio de Santana, un corregimiento de Puerto Asís donde hay batallones del Ejército, le contó a Fátima que las niñas salían de clase a encontrarse con los militares apenas ellos las llamaban. Cuando fue a hablar con las mamás de las adolescentes, ellas querían que se fueran con los soldados.

Ante estos hechos, el Comandante General Alberto Sepúlveda Riaño, de la Brigada de Selva No. 27 del Ejército que opera en Putumayo, explica que no puede decir si antes pasaba o no porque lleva en el departamento dos años.

Respecto a los batallones de Santana, explica que los militares trabajan de 6:30 a.m. a 8:00 p.m. y viven allí con sus esposa e hijos. *“La gente especialmente tiene esas versiones cuando tienen relaciones con las Farc o los narcotraficantes para desprestigiar al Ejército, pero el ICBF y la Defensoría son fuentes apropiadas y no hay denuncias porque no es cierto”,* asegura el comandante y reitera que no

hay ni una sola denuncia contra ninguno de los 7.000 integrantes del Ejército en Putumayo.

Sin embargo, en 2016 la Defensoría ya recibió una denuncia de una niña que habría sido abusada sexualmente por un militar de la Brigada 27 en Mocoa y actualmente el caso está siendo estudiado por el Ministerio Público, según cuenta el defensor regional Fabián Vargas.

Paramilitares, los más aberrantes

La coca también atrajo a los paramilitares y con ellos llegaron nuevas violencias contra las mujeres. Cuando arribaron a la región, en 1997, la violencia contra ellas cambió drásticamente. A partir de ese año, los hombres enviados por Carlos Castaño llegaron al departamento y se constituyeron en el Bloque Sur Putumayo, un apéndice del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

En 1999 se sintió más rigor su presencia tras las masacres de El Tigre, La Dorada y El Placer. Los paramilitares obligaban a que todo el pueblo se reuniera en un sitio, fuera al parque, la cancha, la calle central, y uno por uno iban sacando a los hombres para asesinarlos. En estas matanzas casi no murieron mujeres, pero sus penas no fueron menores.

Una de las maneras de someterlas fue la violencia sexual. Amanda Camilo sostiene que fue tan cruel como en otros departamentos solo que se

“ ”

EN EL TIGRE ENTENDIMOS QUE LA SATISFACCIÓN PARA LOS PARAMILITARES ERA ACABAR A LOS HOMBRES Y QUE LAS MUJERES TUVIÉRAMOS ESE SUFRIMIENTO.

Adriana, habitante de la inspección de Valle del Guamuez.*

invisibilizó mucho más porque en Putumayo la población es mucho menor (345.000 habitantes según el DANE) que en lugares como Antioquia o Magdalena Medio.

Aunque la fiscal de Justicia Transicional Luz Dary Páez se ha dedicado al tema de las exhumaciones, fue una de las primeras funcionarias con quien las mujeres de El Placer y La Hormiga estuvieron dispuestas a hablar. Luego de que dos mujeres le contaran sus historias y de que le pidieran ayuda para otras víctimas de violencia sexual en la Inspección, la funcionaria habló con la fiscal 27 Luz Elena Morales, quien lleva los casos de los paramilitares que operaron en Putumayo y se postularon a la Ley de Justicia y Paz.

Después de su autorización, Páez organizó una jornada de violencia sexual en marzo de 2015 junto a dos psicólogos y un investigador del CTI de la Fiscalía. Como llegaron más de las 35 víctimas que esperaban, tuvieron que programar otra jornada para abril de ese mismo año. En total, escucharon y registraron las historias de 92 mujeres y 6 hombres abusados sexualmente, el 98% de ellos por los paramilitares y el 2% restante por la guerrilla.



Al principio el silencio era tal que nadie hablaba y el primero que se atrevió fue un hombre, violado por los paramilitares casi simultáneamente que su esposa. “Las jornadas de ese delito no las podemos hacer tan públicas porque todo el mundo sabrá que son víctimas y eso es lo que no quieren porque sienten vergüenza. En el caso de El Placer, Elizabeth Mueses que entró a las veredas a hablar con la gente y a través de los líderes hizo correr la voz”, explica la fiscal.

“ ”

A UNA MUJER AFRODESCENDIENTE LE TIRARON UN BULTO LLENO DE ROPA PARA QUE LO LAVARA EN EL RÍO (GUAMUEZ) SÓLO PORQUE ESTABA JUGANDO DOMINÓ Y OTRA CUIDÓ EL NIÑO DE UNOS PARAMILITARES DURANTE UN AÑO.

Marina, una habitante de esa inspección que vivió allí durante la hegemonía paramilitar.*

A pesar de que los paramilitares se desmovilizaron hace 10 años en Putumayo, algunos habitantes todavía temen borrar los letreros que ellos pintaron, como ocurre en El Placer.
Foto: María Clara Calle, periodista de VerdadAbierta.com

Muchos de los relatos que escuchó apuntaban a que los paramilitares amenazaron a las víctimas para que no los denunciaran con sus comandantes, lo que para Páez es un indicativo de que estaba prohibido en las Auc. Agrega que una mujer vio cómo mataron a un paramilitar por violarla y que muchas otras personas coinciden en que los victimarios estaban drogados durante el abuso sexual.

“En la organización fue sagrado, una mujer por bonita que fuera, y fuera capturada y (...) la tuvieran, si alguien se atrevía a hacerle algo me consta que lo mataban”, dijo ante los Tribunales



de Justicia y Paz Carlos Mario Ospina, alias 'Tomate' o 'Tomás', uno de los desmovilizados del Bloque Sur de Putumayo y quien en su momento fue comandante urbano de Puerto Asís.

Sin embargo, en Putumayo abundan los relatos de las mujeres violadas por los paramilitares, desde los más desconocidos como el de Omaira, quien fue violada por uno de ellos antes de cumplir los 18 años, hasta los más emblemáticos como el caso de las hermanas Galárraga, quienes fueron violadas, asesinadas y desaparecidas por las Auc en Puerto Caicedo.

La sevicia llegó hasta el punto de que los paramilitares, además de violarlas, las señalaban de guerrilleras o las acusaban de estar contagiadas de sida para asesinarlas.

“Los paramilitares pegaban a las mujeres por chismosas, groseras, por abandonos de sus hijos. Querían abusar de las mujeres. Algunos jefes paramilitares eran Carranza, Taison, Costeño, Caleño, Garganta, el Cura. No solo ellos ejercían el poder con respecto a la violencia sexual, también los subalternos lo hacían”, confesó una mujer de Puerto Colón

La Alianza Tejedoras de Vida ha hecho diferentes murales en todo Putumayo para resistir. Este, en Mocoa, recuerda los nombres de algunas mujeres que han muerto en el conflicto.

Foto: María Clara Calle, periodista de VerdadAbierta.com

para la comisión de la verdad con enfoque de género que realizó la Ruta Pacífica de Mujeres en todo el país en 2014.

En lugares como El Tigre, el abuso fue más allá de la penetración forzada y obligaron a algunas mujeres a que les lavaran los uniformes, cocinaran para ellos o les cuidaran los hijos. Incluso las encerraban en jaulas para castigarlas sin motivo alguno.

Todo esto generó una marca tan profunda en las mujeres que tuvo que pasar una década después de la desmovilización formal del Bloque Sur Putumayo, ocurrida el 1 de marzo de 2006 en Puerto Asís, para que algunas mujeres se atrevieran a denunciar. Algunos de sus relatos fueron incluidos en el informe del CNMH, que fue publicado en 2012. Otras lo hicieron en las jornadas de la Fiscalía, pero como explican Marina y Adriana, en lugares como El Tigre no todas están dispuestas a hablar.

“El silencio es mucho porque no todas tenemos la valentía, pero ha llegado el día de contar qué pasó para que ellos (los paramilitares) tengan la capacidad de la

verdad”, sostiene Marina. Y es que a pesar del miedo que todavía las obliga a quedarse calladas y de los vejámenes que padecieron, muchas de ellas aprendieron a resistir en medio del conflicto.

Al frente de la guerra

En medio de la guerra que azotó a Putumayo, muchas mujeres se convirtieron en un pilar de resistencia en sus pueblos. Decenas de veces intermediaron ante los grupos armados para rescatar a algún hijo, propio o ajeno, e incluso para pedirles que se fueran.

“El conflicto ayudó que ellas tuvieran que asumir liderazgos, es paradójico, pero si no, seguirían sometidas a los hombres, como les enseñaron sus tradiciones católicas y conservadoras, que vienen en gran parte de la colonización nariñense en Putumayo”, explica la investigadora Ramírez.

Durante su investigación quedó impresionada con la violencia intrafamiliar y el patriarcalismo que existe en Putumayo. Esto es lo que han soportado mujeres como Doris*, una indígena Nasa de Puerto Caicedo quien, desde

pequeña, fue criada para servirle a su esposo y que cuando llegó el momento de la guerra y de la coca, él hizo de las suyas.

Por su parte, Ghenit Margot Melo, psicóloga de la Comisaría de Familia de San Miguel, está convencida de que el conflicto alrededor de la coca potenció un patrón de conducta en el que las mujeres consideran normal lo que padecen y sienten la necesidad de aguantar los maltratos de sus esposos, todo porque “ya soportaron que los grupos armados las violaran a ellas y a sus hijas”.

Y precisamente eso fue lo que notó el padre Alcides Jiménez en Puerto Caicedo. A principios de los ochenta, comenzó trabajar con las mujeres para que enfrentaran el machismo, a promover un programa de desarrollo rural y a inculcarles la necesidad de organizarse. Fue así como se creó la Asociación de Mujeres de Puerto Caicedo (ASMUM), a principios de los noventa, quizá la organización femenina más antigua del Putumayo y que apalancó la creación de la Ruta Pacífica de Mujeres, la red más grande de este tipo de asociaciones en todo el país.

El trabajo de este religioso se irradió por todo el departamento como inspiración para crear muchas más organizaciones en defensa de los derechos, especialmente de las mujeres. En un mapeo de iniciativas en cuatro regiones del país, presentado al Programa Suizo para la Promoción de Paz en Colombia, Esperanza Hernández identificó que en Putumayo muchas de las propuestas estaban inspiradas por el padre Alcides. “Allí son las

mujeres las que lideran el proceso de construcción de la paz desde experiencias indígenas y afrocolombianas”, indica el estudio.

DE LAS 65 INICIATIVAS DE PAZ QUE HABÍA EN PUTUMAYO EN 2005, 35% ERAN JALONADAS POR MUJERES.

Pero así como su vida impactó en Putumayo, pasó lo mismo con su muerte. El 11 de septiembre de 1998 asesinaron al padre Alcides dentro de la iglesia, cuando se preparaba para dar la eucaristía. “Toda la plataforma social y organizativa quedó en shock como dos años, sin querer siquiera ni respirar y encima luego arrasaron los paramilitares en 1999 y al año siguiente la implementación del Plan Colombia”, explica Amanda.

Esa mezcla afectó profundamente el tejido social. Por ejemplo, en ASMUM había 200 mujeres asociadas, pero a principios del 2000 ese número se

redujo a no más de 20. Pero incluso así se arriesgaron a romper las reglas que impusieron los grupos armados. En 2003 había toque de queda a partir de las 5 de la tarde en Puerto Caicedo, pero eso no fue impedimento para que cerca de 3.600 de todo el país personas llegaran en 116 buses, a las 10 de la noche del 25 de noviembre, para gritar contra la guerra y las fumigaciones. “Es una forma de no sentirnos solas y de decirles a los armados que las mujeres aquí no queremos esta vida ni para nosotras ni para nuestros hijos”, expresa Amanda.

Defensoras de vidas

Y es que casi que en cada municipio donde se vivía el conflicto intensamente, había una o varias mujeres que se pararon de frente a los paramilitares o a los guerrilleros.

Esto pasó, por ejemplo, en el corredor Puerto Vega - Teteyé. Allí las mujeres se volvieron las presidentas de las juntas de acción comunal para evitar que siguieran matando a los hombres que ocupaban esos cargos, como afirma Sonia.

En El Placer, la batuta la llevaron Nohemí Narváez, considerada la ‘cacica’ de la comunidad según el informe del CNMH; Elizabeth Mueses y, a diferencia de muchos otros lugares, trabajaban de la mano con hombres como Floresmilto Calderón y Salvador Carreño.

Pese a los esfuerzos de los líderes, en la inspección de El Placer es común encontrar casas abandonadas, inundadas de maleza.

Foto: María Clara Calle, periodista de VerdadAbierta.com



“A veces me llamaban en la madrugada y me decían que tenían 5 o 6 muchachos para que yo dijera si eran del pueblo o no. Cuando iba por ellos, los paramilitares me amenazaban, que si eran guerrilleros me mataban a mí y a mi familia”, recuerda Elizabeth. En otra ocasión, evitó que los paramilitares se quedaran con las casas que habían abandonado los que se fueron. “Esa señora si se les paró duro a los ‘paracos’, recuerda Doris.

En El Tigre sucedía algo similar. Adriana cuenta que incluso los paramilitares se enojaban con ella por ser “la mamá del pueblo”, a la que todos llamaban en momentos de vida o muerte. Y sólo ella tuvo el valor de decirles a los paramilitares que se fueran, en una reunión que hicieron las autodefensas con todos los habitantes el 13 de febrero de 2003.

La misma Amanda Camilo, en Puerto Caicedo, rompió sus propios protocolos de seguridad de no trasladarse a la zona rural para rescatar a su hermano, capturado por los paramilitares. Mientras que Rosalba Lasso, en la vereda Las Vegas, a 10 minutos de La Hormiga, además de defender a los jóvenes de la comunidad, entre 2008 y 2009 se echó a hombros la tarea titánica de convencer a las 180 familias de la zona que erradicaran la coca para beneficiarse del programa de Guardabosques del Plan Colombia. Pese a la oposición y a las amenazas, lo logró.

Rosalba asegura que a ella como mujer siempre la respetaban los grupos armados, mientras que Diego*, un habitante de La Hormiga que desde entonces recorría el

Bajo Putumayo transportando diferentes mercancías, cree que no las mataron porque significaba echarse a toda una población en contra y Cindy afirma que en el caso de Elizabeth y Nohemí las protegía ser parte del comité de animadoras de la iglesia de El Placer. Sonia es todavía más contundente: dice que las mujeres tenían que negociar porque a los hombres los corrompen más fácil.

“ ”

REGRESÉ A PUTUMAYO, A LA CASA DE MIS PADRES EN LA VEREDA BRISAS DEL PALMAR PORQUE VI QUE LA GENTE NECESITABA QUIÉN LOS ORIENTARA Y ME PIDIERON QUE FUERA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ACCIÓN DE COMUNAL. ME QUEDÉ ALLÁ ORGANIZANDO LA COMUNIDAD.

Elizabeth Mueses, lideresa de El Placer.

Pero a algunas personas, esa resistencia les costó mucho. Betty Laura Vallejo, una de las promotoras de ASMUM, está exiliada; Luz Aída Ibarra, de la Iniciativa de Mujeres por la Paz, se tuvo que desplazar a causa de la violencia; a Floresmilo Calderón lo han intentado matar todos los grupos armados y a Amanda Camilo le ha tocado soportar el secuestro de primos, lesiones contra un cuñado y sacar a sus hijas de Puerto Caicedo por estar en la lista de personas a asesinar.

A Elizabeth, por ejemplo, la guerra potenció su liderazgo. Tras la masacre de El Placer, terminó en Pasto con todo su capital perdido.

“Regresé a Putumayo, a la casa de mis padres en la vereda Brisas del Palmar porque vi que la gente necesitaba quién los orientara y me pidieron que fuera presidenta de la Junta de Acción de Comunal. Me quedé allá organizando la comunidad”. Elizabeth Mueses, lideresa de El Placer.

Para Ramírez, las familias son el motor que hizo que las mujeres de Putumayo resistieran el conflicto. Ella explica que muchas, al quedar viudas, retomaron los procesos de organización para poder sacar a sus hijos adelante.

Y es que en la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida encontraron un espacio para hablar de lo que le había sucedido y desahogarse, como cuentan muchas líderes, entre ellas Fátima Muriel: “las mujeres tenían el alma partida sin que nadie las ayudara”.

A la vez que sirven como catalizador, la Alianza se piensa como un puente entre las organizaciones y las instituciones del Estado. Su trabajo ha tomado tanta fuerza, que lograron que la Gobernación actual de Putumayo trabaje con ellas la política pública de equidad, en la que están recopilando propuestas con organizaciones de todo el departamento.

Aún el camino es largo. Varias lideresas reconocen que el miedo a hablar todavía es generalizado, en parte porque las Farc siguen en sus territorios y varios de los paramilitares desmovilizados viven en el departamento. Aunque la coca no está tan extendida como antes, muchos campesinos siguen viviendo de ella mientras que algunas



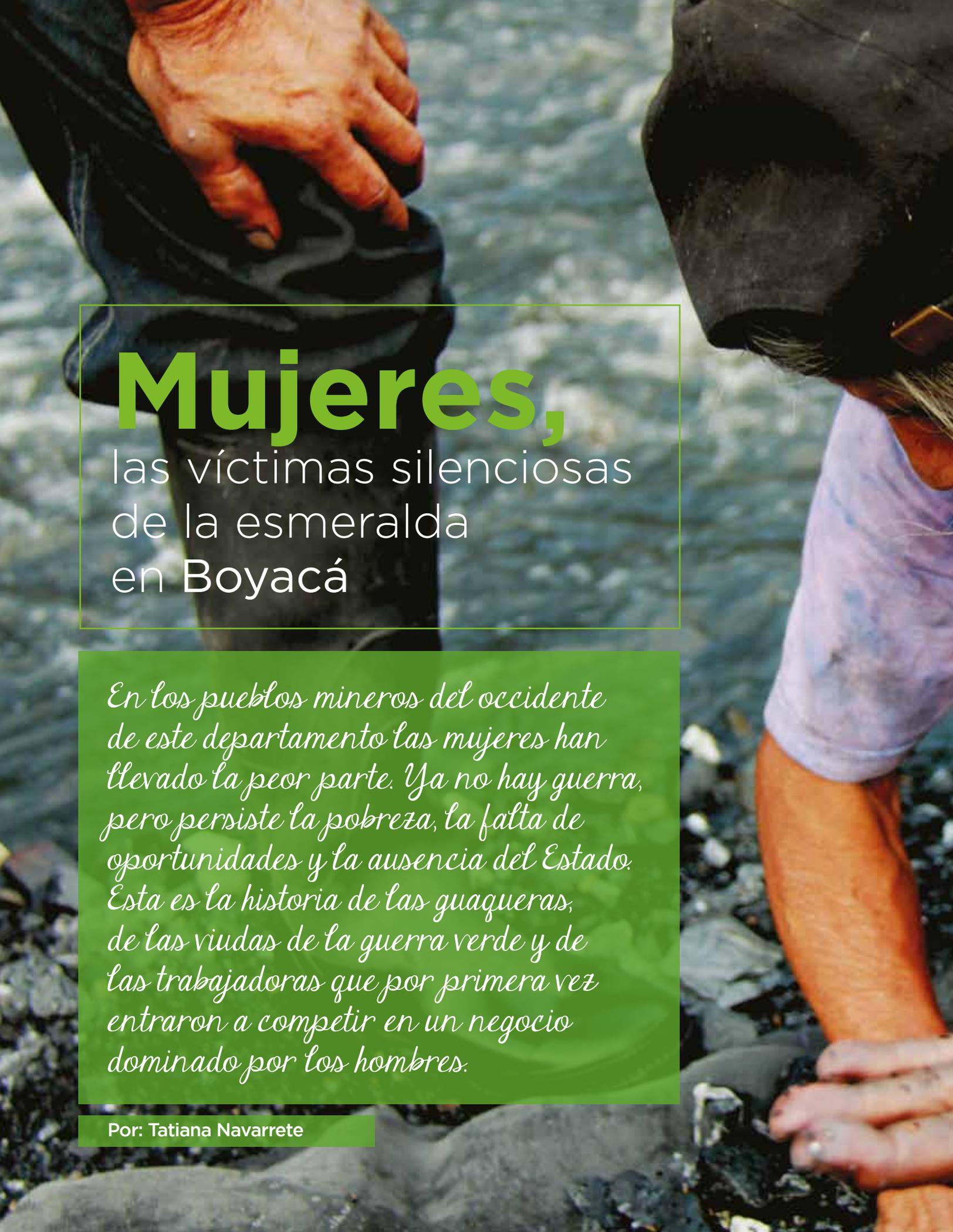
organizaciones están negociando con el gobierno nacional para sustituir los cultivos. Por su parte, las mujeres asisten periódicamente a talleres de formación de líderes de paz para estar listas en la implementación de los acuerdos de La Habana y frente al punto de drogas ilícitas piden que se cumpla el pacto entre el Gobierno y la guerrilla de que los campesinos serán tratados de una manera diferente por ser el eslabón más pequeño de la cadena.

Y es que en medio de la guerra, la sangre y la coca que ha corrido en Putumayo, existen muchas alianzas de la gente corriente que intenta unirse para luchar por su territorio, y entre ellas, las mujeres siguen dando la batalla.

Hoy la Alianza Tejedoras de Vida es la organización social de mujeres más fuerte del departamento..

Foto: Cortesía de la Alianza Tejedoras de Vida.

“LAS MUJERES ASISTEN PERIÓDICAMENTE A TALLERES DE FORMACIÓN DE LÍDERES DE PAZ PARA ESTAR LISTAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA HABANA Y FRENTE AL PUNTO DE DROGAS ILÍCITAS PIDEN QUE SE CUMPLA EL PACTO ENTRE EL GOBIERNO Y LA GUERRILLA...”



Mujeres,

las víctimas silenciosas
de la esmeralda
en Boyacá

En los pueblos mineros del occidente de este departamento las mujeres han llevado la peor parte. Ya no hay guerra, pero persiste la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado. Esta es la historia de las guaqueras, de las viudas de la guerra verde y de las trabajadoras que por primera vez entraron a competir en un negocio dominado por los hombres.

Por: Tatiana Navarrete



Olga Castro se levanta a las 3:30 de la mañana. Prepara el desayuno y el almuerzo de sus cuatro hijos, empaca una lona en su morral y se pone un jean gastado y sus botas de caucho. A las 4:30, cuando aún no ha salido el sol, llega a la esquina de la plaza de mercado de Muzo, donde por lo menos 40 personas esperan un 'mochilero', como llaman a las camionetas que van hasta las minas de esmeralda, a 50 minutos de allí. Lleva los 10 mil pesos del pasaje de ida y espera encontrar una piedra para poder costear el viaje de regreso. Cuando no tiene un peso en el bolsillo, debe salir desde las 2 de la mañana para llegar caminando.



La historia de Olga es la de cientos de guaqueras que ven en la esmeralda

el único sustento para sus familias. Es un oficio donde abundan las mujeres, pues son pocos los puestos disponibles para ellas en las empresas mineras.



SIEMPRE HEMOS SIDO MUCHAS MUJERES QUE VIVIMOS DE LA MINA, PORQUE PARA NOSOTRAS NO HAY EMPLEO. SIEMPRE NOS TOCÓ ESA LUCHA, ENTONCES ¿EN QUÉ MÁS VAMOS A TRABAJAR? *se pregunta esta mujer.*

En los pueblos esmeralderos del occidente de Boyacá como Muzo, Maripí, Pauna, Santa Bárbara, Otanche y San Pablo de Borbur la guaquería existe hace más de setenta años, cuando las minas eran administradas por el Banco de la República. Desde entonces se practica lo que llaman 'minería de hecho': algunos abren huecos en las montañas en busca de esmeraldas por su propia cuenta y sin



permisos legales, otros se arriesgan a recorrer los túneles inactivos que alguna vez fueron explotados por las empresas y los gUAQUEROS más aguerridos invaden en las noches los socavones activos.

La gUAQUERÍA ha estado inserta en el occidente de Boyacá en todos los niveles. *“Los militares, los policías, los jueces, los alcaldes, los sacerdotes, los ingenieros, todo el mundo gUAQUEA en las noches, echando de lado el uniforme. Las esmeraldas enloquecen a todo el mundo”,* recuerda

el periodista Pedro Claver Téllez en su libro *La guerra verde*.

Sin embargo, como este tipo de gUAQUERÍA raya en los límites de la ilegalidad, las autoridades locales y las compañías mineras han aumentado los controles. A gUAQUERAS de toda la vida, como Olga, no les ha quedado de otra que lavar la tierra que les ‘regalan’ las empresas con la esperanza de que a los trabajadores se les haya ‘colado’ una esmeralda. Los empresarios de la zona calculan que

por cada quilate de esmeralda se exploran diez toneladas de tierra estéril que reparten a los gUAQUEROS. Más que una obra de caridad, esta tierra ha sido una exigencia permanente de los pobladores del occidente de Boyacá.

Cada mañana a la puerta de las minas pueden llegar entre 50 y 500 gUAQUEROS, aunque si corre el rumor de que la mina está ‘pintando’ pueden ser más de 3.000. El sistema es siempre el mismo: en camiones o vagones extraen la tierra que sale de la mina y la dejan a merced de la multitud. Entre más tierra obtenga cada gUAQUERO son mayores las posibilidades de encontrar una piedra verde y ahí comienza la batalla. Las consecuencias van desde peleas, empujones, hasta brazos, piernas y costillas rotas.

Las empresas mineras han inventado varias fórmulas sin éxito: un corral donde encerraban a las personas para que una vez depositada la tierra todos corrieran tras ella, horas de fila para recibir una *“pucho de tierra”* y hasta optaron por separar a los hombres de las mujeres. No parece existir una fórmula digna para que los gUAQUEROS recojan las sobras de la extracción minera.

En las ‘voladoras’, como se les conocen popularmente a esos lugares, las mujeres han llevado la peor parte. *“Yo me boté a la tierra y se botaron muchos hombres encima. Uno me colocó las rodillas en la espalda y por encima de mí escarbaba con el plato y yo gritaba y gritaba. Hasta que me desprendió el hombro”,* recuerda Doris Luna, una gUAQUERA de más de 60 años de edad. En otra



oportunidad, como si se tratara de una broma, un grupo de jóvenes le zafaron el brassier a una mujer y se lo lanzaron entre ellos, a otra le quitaron el pantalón solo por burlarse.

Este particular método de g.uaquería, que es más parecido al barequeo, lo instauraron los primeros ‘patrones’ del occidente de Boyacá que explotaron las minas a cielo abierto a mediados de los setenta. Mientras un par de bulldóceres destrozaban la montaña, los restos de tierra caían sobre las quebradas y los g.uaqueros ‘paliaban’ el lodo buscando esmeraldas. Este procedimiento fue conocido como el ‘tambreo’. Llegaron hombres y mujeres de todas partes del país que crearon asentamientos improvisados. Se formaron de esa manera barrios como La Catorce, Matecafé y La Nevera entre Muzo y el vecino municipio de Quípama.

Fue Víctor Carranza, quien años después implementó la explotación por túneles, lo que hizo más escasa la tierra para los g.uaqueros. Ahora, según dicen, encuentran menos esmeraldas y de menor calidad. Por eso crean grupos de trabajo y reparten la ganancia entre todos. El equipo de diez g.uaqueras del que hace parte Olga encontró una minúscula piedra de un verde pálido, la vendieron por 40 mil pesos y cada una se lleva 4 mil.

“HACE UNOS 20 AÑOS ACÁ USTED SE HACÍA 100 MIL, 200 MIL O UN MILLÓN DE PESOS, PERO AHORITA USTED GUAQUEA OCHO DÍAS, UN MES Y NO SE HACE NADA”

cuenta Cecilia Escárraga, quien lleva en el oficio más de 30 años

“ ”

CON EL TAMBREO SÍ SE ENCONTRABA ESMERALDA, PORQUE ERAN CORTES ABIERTOS. ARMÁBAMOS CAMBUCHES Y DURÁBAMOS SEMANAS ENTERAS DURMIENDO EN LA TIERRA. A VECES DEJÁBAMOS SOLOS A NUESTROS HIJOS, *recuerda otra g.uaquera.*

La mayoría de las piedras que encuentran ahora son tan pequeñas que no se comercializan, sino que se hace un ‘trueque’, es decir, se intercambia por productos de mercado básico: aceite, arroz o pastas.

En este contexto, ‘enguacarse’ no es sinónimo de hacerse rico. Como dicen todos en las minas, “*cada esmeralda ya tiene su dueño*”. Se refieren a que cada g.uaquero es cercano a un comerciante que les presta dinero en épocas difíciles y a veces les da las herramientas de trabajo, por lo que quedan comprometidos a venderles las piedras que encuentren a precios módicos. La mayoría, además, están endeudados con las tiendas en lo que llaman ‘fía por guaca’. A veces el valor de esmeralda no da para pagar la cantidad de comida que les han fiado.

La situación económica de los g.uaqueros que se dedican a ‘paliar’ tierra ha empeorado después de que la Policía Nacional ordenó suspender la ‘voladora’ más grande por el daño ambiental que estaba causando a un riachuelo cercano. Se trata de los residuos de tierra de la mina de Puerto Arturo que pertenece a la empresa Minería Texas Colombia (MTC),



subsidiaria de Texma en Estados Unidos. Antes de su muerte en abril de 2013, Víctor Carranza le vendió a esta multinacional la mina que lo hizo rico. Allí encontró a Fura y Tena, las dos esmeraldas más grandes del mundo.

Solo quedan las Minas de Cunas en el vecino municipio de Maripí, donde opera Esmeraldas Santa Rosa y la Mina Real, en las afueras de Muzo. Sin embargo, son dos empresas pequeñas cuyos restos de tierra no dan para sostener la economía de un municipio de cerca de 14 mil habitantes. En Muzo, un pueblo reconocido por tener las mejores esmeraldas del mundo, los mineros viven en la miseria.

Las g.uaqueras aseguran que quieren tener fuentes alternativas de ingresos, pero en los pueblos los sueldos no superan los 200 mil pesos y el trabajo es escaso.



Para buscar soluciones, en Otanche crearon la Fundación Mujeres con Propósito por Boyacá para buscar financiación a proyectos agrícolas, avícolas y textiles. En Muzo, aunque no se han organizado, algunas g.uaqueras crearon sus propias empresas. Por ejemplo, Luz María Pinilla, una de las más reconocidas de allí, fundó la empresa de Confecciones MonaLisa, pero reconoce que ha sido difícil conseguir trabajadoras que no dejen todo tirado cuando la mina está ‘pintando’.

“Los pésimos sueldos son un desestímulo, pero la cultura minera es la de la inmediatez. Si escuchan que uno entre mil encontró una esmeralda dejan todo botado y se van a buscar fortuna. Se convierte así en un círculo vicioso”, explica Elin Bohórquez, actual alcalde de Muzo. Esto se resume en una frase que repiten los g.uaqueros en este lugar: “aquí todos quieren ser Carranzas”.

El oscuro panorama laboral

El gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990) expidió el Decreto 1335 (del 15 de julio de 1987) mediante el cual se reglamentaba todo tipo de actividades subterráneas. Sin dar mayor explicación, el artículo 40 decía: “*queda prohibido el trabajo de mujeres en todas las edades y de varones menores de 18 años, en labores subterráneas relacionadas con la actividad minera*”. Ellas solo podían trabajar en cargos de dirección o supervisión, lo que le quitaba de tajo cualquier oportunidad laboral a las mujeres g.uaqueras con bajos niveles de escolaridad.

Pero el decreto cayó como anillo al dedo a un grupo de ‘patrones’, quienes creían que “las mujeres espantaban las esmeraldas” y por eso no debían

En Puerto Arturo existió una especie de corral donde encerraban a los g.uaqueros mientras tiraban la tierra.
Foto: Revista Semana

trabajar en los socavones. Ellas solo podían ocuparse en labores de cocina, limpieza y, en contadas ocasiones, como secretarias.

Esta evidente discriminación estuvo vigente durante 28 años. En septiembre del 2015 la situación cambió con un nuevo decreto que prohibió las labores subterráneas solo a los menores de edad y las mujeres en estado de embarazo. Sin embargo, en algunos pueblos no se ha visto reflejado en la práctica. Así ocurre por ejemplo en el municipio de San Pablo de Borbur, donde están las minas de Coscuez, las mismas que en épocas de la ‘guerra verde’ fueron territorio de disputa.

Desde 1976, el Estado le concedió permiso de explotación a Esmeracol S.A., empresa conformada en ese entonces por algunos de los capos que sobrevivieron a la guerra de mediados de los setentas, conocida como la segunda guerra verde. La empresa explora actualmente once bocatóneles, pero tiene otra decena que están inactivos.

De los 200 trabajadores formales que tiene Esmeracol, solo cinco son mujeres. Y tal como ordenaba el decreto del siglo pasado, se encargan del casino y de los servicios generales. Aún hoy, cuando se cuestiona esta norma, hombres y mujeres de la zona opinan que el trabajo dentro de la mina no es apto para las mujeres. “Es que el Código de Minas no lo permite. Creo que es por un tema de salud”, asegura Mauricio Fandiño, gerente de Esmeracol.



En 2015 un decreto permitió la entrada de mujeres a las minas. Cada vez son más las trabajadoras en cargos profesionales.

Foto: Tatiana Navarrete

El trabajo de las gwaqueras en Coscuez es, sin embargo, extenuante. Se organizan en grupos para entrar a los socavones abandonados y extraer pesados bultos de tierra. Adentro se exponen a derrumbes, gases tóxicos y a temperaturas que superan los 50 grados centígrados, pues las minas inactivas no cuentan con un sistema de ventilación. Se conocen historias de gwaqueros que han muerto golpeados por una piedra o ahogados luego de perderse en el laberinto de los túneles. *“Vamos a las salas viejas. Allá no hay luz, no hay aire y es peligroso. Somos un grupo de nueve gwaqueras las del barrio el Silencio y de enero a*

acá nos hemos hecho solo 100 mil pesos chichiguados”, cuenta Angie Cuellar, gwaquera de 25 años.

No obstante, en Muzo las cosas están cambiando paulatinamente. A mediados de 2010, cuando un grupo de ingenieros mexicanos llegó a la región contratados por MTC para explotar la mina de Puerto Arturo, notaron con extrañeza dos cosas: la ausencia de mujeres en los campamentos y la

costumbre que tenían los obreros de llevarse las esmeraldas a los bolsillos. Allegados a Carranza cuentan que él mismo decía: *“si nosotros ponemos al Papa a cuidar las esmeraldas, el viejo se las roba”.*

Carlos Contreras, el ingeniero mexicano que dirige las operaciones en la mina, decidió incorporar madres cabeza de familia en el cuarto de lavado – el espacio donde se limpian y se pesan las esmeraldas – y donde más se presentaban pérdidas. Para ese entonces, Víctor Carranza y las familias Molina y Vitar, que seguían siendo socios de MTC, no aceptaron de buena manera la idea de incorporar mujeres, pues persistía la idea de que daban mala suerte. Solo hasta que las pérdidas por robo comenzaron a disminuir cambiaron de idea.

Con el nuevo decreto en vigencia, entraron las primeras mujeres a trabajar bajo tierra. En 2015 comenzaron con las ‘malacateras’, como se llama a las personas que manejan los ascensores dentro

**“ACÁ NO
VIVIMOS DE
ESMERALDAS
SINO DE
ESPERANZAS ...
ESTÁ UNO
ARRIESGANDO
LA VIDA”**

de la mina. Ante la incredulidad de los trabajadores, fue el jefe, Carlos Contreras, quien tuvo que probar por primera vez un ascensor operado por mujeres para que todos siguieran su ejemplo. *“Antes era imposible ver una mujer en la mina. Yo pensaba que era un trabajo muy duro, de mucho esfuerzo físico, pero no. Creo que ya nos hemos ido acostumbrando, a pesar de que el gremio del occidente de Boyacá es bien pesado”*, cuenta Adriana Pérez, ‘malacatera’ de MTC. Sin embargo, la proporción aún es mínima: de los 780 empleados, solo 80 son mujeres.

Mina Real, la otra mina de Muzo, siguió el mismo ejemplo y contrató a dos mujeres que hacen control, es decir que se encargan de que las esmeraldas lleguen a los dueños de las minas y no a los bolsillos de los obreros. *“Yo pensé que yo no podía con el puesto. Cuando me subí al ascensor me eché como unas cuatro bendiciones, pero me fue bien, muy especiales ellos, no tengo de qué quejarme”*, afirma Vianey Bustos, una de las trabajadoras.

Falta mucho para que las mujeres entren a competir en igualdad de condiciones en el negocio de la esmeralda, pero estas nuevas mineras están haciendo la diferencia. Un panorama sin duda más alentador del que vivió la generación que las antecedió.

Las viudas de la guerra verde

El occidente de Boyacá no vivió solo una, sino tres guerras intermitentes entre los ‘capos’ de las esmeraldas. No se sabe a ciencia cierta cuántas fueron las víctimas, pero quienes la vivieron, recuerdan que fue en su mayoría gente inocente. *“Eso fue una guerra de los ‘patrones’, de los que mandaban, pero mataron a mucha gente que no tenía nada que ver. Solo por haber nacido en un sitio o por ser amigo de alguien”*, declara una mujer que por razones de seguridad pide la reserva de su nombre.

La guerra terminó porque las partes pactaron la paz el 12 de julio de 1990, en un acto acompañado por representantes de la iglesia católica. Nadie discute los beneficios de no vivir bajo las balas, pero en los recuerdos resurgen las heridas de una paz sin verdad y sin reparación, pues la mayoría de las víctimas no han sido reconocidas como tales por el Estado. Las cientos de viudas que aún viven en el occidente de Boyacá están ahí para recordarlo.

La primera de las guerras verdes comenzó en 1965 con la muerte a manos del Ejército de Efraín González, un bandolero

que hizo parte de los ‘Pájaros’, que integraban el Partido Conservador en la época de La Violencia, y quien se proclamaba como el ‘patrón’ del occidente de Boyacá. La pelea entre los ‘capos’ por ser su sucesor dejó cerca de 1.200 muertos. En 1973, para darle fin a la confrontación, el gobierno cerró las minas, militarizó la zona y desalojó a más de 15 mil guaqueros. *“Cuando yo estaba pequeña, a Muzo llegó el Ejército, ellos también maltrataban a la gente, les quemaban los cambuches, maltrataban a las mujeres”*, recuerda Alba Cecilia Ortiz, quien hoy sigue guaquakeando.

De acuerdo con la investigación titulada Víctor Carranza, alias “el Patrón”, del senador Iván Cepeda y del sacerdote jesuita, Javier Giraldo, para 1966, el 95% del mercado mundial de esmeraldas dependía del ‘mercado negro’ colombiano, de ahí la importancia de estos ‘capos’, quienes, para quedarse con todo el negocio, sobornaron a funcionarios de todas las entidades del Estado que intentaron controlar las minas: el Banco de la República, la Policía y la extinta Empresa Colombiana de Minas (Ecominas).

A mediados de los setenta la violencia se intensificó con la entrada de los narcotraficantes.



“EL ESTADO ACÁ SE DESENTENDIÓ ... EL PUEBLO CON HAMBRE NO VIVE EN NINGUNA PARTE”

Las grandes extensiones de tierra del occidente de Boyacá se llenaron de plantas de hoja de coca y de laboratorios para procesarla. Fue el esmeraldero Gilberto Molina quien llevó a la región a su amigo y antiguo trabajador, el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, más conocido como ‘El Mexicano’. La delgada línea que dividía a los esmeralderos de los narcos se hizo cada vez más difusa.

La guerra solo cedió en 1978, cuando el gobierno por fin les dio a los esmeralderos lo que habían pedido por años: formalizar sus fortunas y que el Estado les entregara las licitaciones para explotar las minas y con esto el control de la zona. Gilberto Molina y su socio Víctor Carranza ganaron dos de éstas y se coronaron como los nuevos ‘capos’ de la esmeralda.

Pasaron solo ocho años para que la guerra estallara de nuevo. Ligia Castro lo recuerda porque para ese entonces vivía en paz en una finca en las afueras de Muzo con su esposo, Luciano Escárraga, y sus 15 hijos sembrando café,

plátano, caña y yuca. A las 3 de la mañana del 12 de octubre de 1987 cerca de 20 hombres armados y vestidos con camuflados sacaron de la casa a Luciano y a su hijo mayor.

Luego de matar a su marido y a su hijo, los hombres armados encerraron a Ligia y a sus otros hijos en un cuarto con seguro y le prendieron fuego a la casa. *“Ahora que está humillada y necesita a alguien llame a su papá Gilberto”,* fue lo último que le

gritaron. Se salvaron solo porque su hijo menor se escabulló por una ventana y les abrió la puerta. Los hombres siguieron su camino y mataron a 4 hombres más de la vereda esa madrugada. El ‘pecado’ de Luciano Escárraga fue haberle dado almuerzo a un grupo de hombres armados que llegó pidiendo comida.

La guerra había comenzado un año atrás. Lo que empezó como un grupo de mineros que no respetó los turnos de un corte que estaba ‘pintando’, terminó en la más violenta guerra que vivió esa región. Se estima que entre 1986 y 1990 murieron más de 3,500 personas. En plena bonanza esmeraldera, en una región donde el poder de los ‘patrones’ aumentaba, mientras el Estado se desvanecía, cualquier problema era propenso a convertirse en una guerra.

El occidente de Boyacá se dividió por ese entonces en dos: Por un lado, Otanche, San Pablo de Borbur, Santa Bárbara y Muzo, donde mandaban Molina y Carranza; y por el otro, Coscuez, Maripí y Pauna, donde grupos de gUAQUEROS se tomaron por la fuerza algunos cortes, liderados por Luis Murcia Chaparro, más conocido como el ‘Pequinés’. Cada



LES PUSIERON LAS MANITOS ATRÁS Y SE PUSIERON A DARLES CULATA EN LA CABEZA. ENTONCES YO LES DIJE ¿PERO POR QUÉ VIENEN USTEDES A HACER ESO? ¿LUEGO QUÉ OFENSA MI MARIDO LES HA HECHO POR ALLÁ DONDE USTEDES DUERMEN? ENSEGUIDA ENTRARON A LA PIEZA DONDE TENÍA A MIS DOS NIÑAS DURMIENDO Y ME VIOLARON LA NIÑA MÁS GRANDE, TENÍA 16 AÑOS. A ELLA LA VIOLARON DELANTE DE NOSOTROS, *recuerda Ligia.*



uno tenía sus propios matones quienes, escudados en pertenecer a grupos de seguridad privada, asesinaron a cientos de civiles.

Para muchos expertos en conflicto, se trató de grupos paramilitares que nunca se desmovilizaron. De hecho, según testimonios de exparamilitares, Carranza envió a cinco de sus hombres más cercanos, incluido un sobrino, al entrenamiento que a mediados de los ochenta dirigió el mercenario israelí, Yair Klein. En estos cursos se formaron los primeros paramilitares de Puerto Boyacá, financiados por Carranza, 'El Mexicano' y la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, (Acdegam).

La disputa llegó a tal punto que pasar de un pueblo a otro era motivo de asesinato. A alguien de Muzo lo podían matar en Coscuez y viceversa. Solo podían transitar mujeres y niños menores de 7 años. *"Fue muy pesado. Nos tocaba a las mujeres traer el mercado desde Santa Bárbara porque a los hombres los mataban. Allí nos humillaban mucho"*, recuerda una guaquera que vivió en Coscuez para esa época y pidió la reserva de su nombre.

Unos y otros actuaban con la misma crueldad. Esta mujer estuvo al otro lado de la guerra, pues trabajó como cocinera para la familia de 'Pequinés'. Recuerda que sus vecinas preferían no andar con ella por miedo a que las mataran o las violaran, como ocurría con frecuencia en la quebrada de Coscuez: *"En ese tiempo lo cogían a uno y lo violaban y uno quedaba era embarazado. Yo quedé con cinco hijos"*.

Luego de que mataran a su esposo, en circuns-tancias que prefiere no recordar, se retiró de la cocina y no le quedó más remedio que dedicarse a la guaquería para mantener a sus hijos. *"Mis niños estaban muy chiquitos cuando eso pasó. A la más pequeña todavía le estaba dando teta. Nos quedamos solos y me tocó salir a echar pala, pasamos hambre, pero Dios nunca me desamparó, cualquier cosita me hacía para lograr el mercadito"*

'Pequinés' no era el único enemigo de Molina y Carranza. El Frente 11 de las Farc hacía presencia en el caserío Otro Mundo, ubicado frente a Muzo.

Para los guerrilleros, los 'patrones' de las esmeraldas eran otros paramilitares más, como los que estaban expandiéndose en el resto del país a mediados de los ochenta.

Estas apreciaciones han sido respaldadas por los exparamilitares. Ante los estrados de Justicia Paz, Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', ha dicho que Carranza no se le debía llamar el 'zar de las esmeraldas' sino 'el zar del paramilitarismo'. Mientras que Salvatore Mancuso aseguró que el esmeraldero participó en las reuniones en las que se planeó la entrada de las Autodefensas a los Llanos Orientales que terminaron en las masacres de Mapiripán y Caño Jabón, en el Meta.

Sin embargo, fue otro enemigo de Gilberto Molina el que provocó su muerte. 'El Mexicano' estaba decidido a 'lavar' su dinero con las minas de esmeralda y ante la negativa de Molina y Carranza, decidió traicionarlos y unirse al bando de 'Pequinés'. El 27 de febrero de 1989, mientras Molina celebraba su cumpleaños en Sasaima, Cundinamarca,

**"EN ESE TIEMPO
LO COGÍAN
A UNO Y LO
VIOLABAN Y UNO
QUEDABA ERA
EMBARAZADO.
YO QUEDÉ CON
CINCO HIJOS"**



2001

Muere Isauro Murcia y Gilberto Molina toma su puesto
- Llega el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha



2005

Enfrentamiento de familias que incumplieron los pactos



2007

Policía encuentra cultivos de coca en fincas de Carranza y Molinas



2009

Hombres de Carranza en entrenamiento paramilitar en Puerto Boyacá



2012

- (Febrero) Asesinato de Gilberto Molina
- (Diciembre) Muere Rodríguez Gacha



2013

'Pequinés' y Carranza firman la paz



2014

Carranza a juicio por conformación de grupos paramilitares

diez hombres armados enviados por Gacha entraron a su finca y lo asesinaron, junto a 24 personas más, entre lo que se contaban guardaespaldas e invitados de la fiesta.

Carranza continuó en su pelea con Gacha por la esmeralda y las rutas del narcotráfico en Boyacá y Meta. Durante ese enfrentamiento, el esmeraldero sobrevivió a varios atentados y murieron varios de sus familiares, por lo que se refugió en las minas y acrecentó su ejército de hombres armados.

Oliveria Arenas vivía para entonces en los límites entre Coscuez y Santa Bárbara, y recuerda las balaceras que se armaban en su barrio: *“Cuando se levantaba el cruce de balas, poníamos el colchón contra la pared y nos escondíamos ahí con mis cinco hijos”*. Tenía un negocio de cerveza y su esposo manejaba un ‘mochilero’ para transportar mineros. Sabían muy bien que no podían cruzar los límites, pero de vez en cuando se arriesgaban para sostener el negocio.

Un día de 1989 a las 10 de la mañana su esposo fue hasta Santa Bárbara por cerveza, cuando un grupo de hombres le prendió fuego al carro, estando él y un amigo que lo acompañaba adentro. Al mediodía le avisaron a Oliveria lo que estaba pasando, pues el cuerpo de su esposo aún seguía en llamas. *“Me tocó ir a recogerlo donde allá donde quedó. Mi muchachito como de siete añitos me decía ‘ay mamá apague a mi papito’. Yo fui y le metí agua y lo apagué, pero ya estaba muerto, lo mataron a las 10 de la mañana y la razón me llegó a mí como a las 12 del día”*. Ella aún recuerda con precisión el olor que se

**“EL ESTADO ACÁ SE DESENTENDIÓ ... EL PUEBLO
CON HAMBRE NO VIVE EN NINGUNA PARTE”**



desprendía de las llamas que consumieron a su esposo, el mismo olor que le suprimió el apetito para siempre.

Oliveria nunca denunció el hecho, pues sabía que ponía en riesgo su vida y la de sus hijos. Desde entonces, entró al oficio de la g.uaquería, entre otras razones porque los ‘patrones’ de la zona le prohibieron seguir vendiendo cerveza. Hoy vive en un rancho cerca de las minas de Coscuez con la esperanza de encontrar una esmeralda en la tierra que arroja Esmeracol.

**“CUANDO SE LEVANTABA
EL CRUCE DE BALAS, PONÍAMOS
EL COLCHÓN CONTRA LA PARED
NOS ESCONDÍAMOS AHÍ CON
MIS CINCO HIJOS”**

Después de la muerte de ‘El Mexicano’, en diciembre de 1989, durante un operativo del Policía en Tolu, Sucre, comenzó el proceso de paz en el occidente de Boyacá respaldado por la iglesia católica. Los bandos se dieron la mano y Víctor Carranza se proclamó como ‘el zar de las esmeraldas’. *“Nos reunimos con ‘Pequinés’ y con Carranza para que dejaran esa guerra. Cada uno puso sus delegados y hubo respeto por la palabra.”*, evoca William Nadar, quien en ese momento fue el alcalde de Muzo y hoy es gerente de Mina Real.

El fin de la llamada guerra verde no significó la inmediata pacificación del occidente de Boyacá. En 2001, el narcotraficante Yesid Nieto quería tomar el control de la zona y le pidió a Carlos



Castaño que mandara un grupo de hombres de las Auc para proteger supuestamente a los esmeralderos de las Farc. El encargado para esa tarea fue Freddy Rendón Herrera, alias 'el Alemán', quien dijo en una entrevista a la Revista Semana que contaban con la aprobación de Carranza: *"él dio la bendición y además aprobó el porcentaje, pero con la condición de que no nos metiéramos en Muzo, en donde él tenía un grupo de seguridad para sus minas"*.

El poder del esmeraldero Pedro Nel Rincón, alias 'Pedro Orejas', se incrementó cuando al parecer se alió con paramilitares y narcotraficantes de los Llanos para proclamarse el nuevo zar de las esmeraldas y de nuevo se desató una guerra entre 'capos', pero esta vez más

silenciosa: en 2007 asesinaron a Yesid Nieto en Guatemala; en 2009 y 2010 Carranza se salvó de dos atentados en los Llanos Orientales; en 2012 en la zona rosa de Bogotá le dispararon 11 veces a Jesús Hernando Sánchez Sierra, hombre cercano a Carranza y de quien se decía sería su sucesor.

Con la muerte de Víctor Carranza en abril de 2013, tras una larga enfermedad, los asesinatos tampoco pararon. A finales de ese año, 'Pedro Orejas' sobrevivió a un atentado perpetrado en Pauna. En esa ocasión murieron cinco personas, entre ellas su hijo. En 2014 mataron a 'Pequínés', el mismo que firmó la paz en 1990. Los medios especularon con el regreso de una nueva guerra verde que no se concretó.

Las empresas internacionales entraron al ruedo, pero el poder de las minas lo mantienen las cinco familias que siempre han tenido el mando en la zona. Aunque las licitaciones están a nombre de sociedades anónimas, investigaciones periodísticas han encontrado que los nuevos dueños son los amigos e hijos de los que, alguna vez, fueron llamados 'patrones'.

Sin verdad y sin reparación

"A veces digo, y no me lamento de decirlo, que acá no tuvimos un proceso de paz, sino que hicimos fue un acuerdo de negocios: 'Usted coja esa mina, yo cojo esta'", opina el exalcalde Nadar, quien recuerda que una de las condiciones de las partes para concretar el acuerdo fue suspender los procesos judiciales "Cuando empezamos con el tema de la paz, 'Pequínés' me dijo: 'vaya y me quita esos 400 y pico de procesos que yo no maté a toda esa gente'".

Viudas de la guerra como Ligia y Oliveria aseguran, sin duda alguna, que la paz pactada fue lo mejor que le pudo pasar a la región y a sus familias, pero no fue fácil aceptar que mientras ellas luchaban por sostener a sus hijos, sus verdugos siguieran libres. *"Ya no le guardo rencor a ninguno de ellos, pero fue duro. Si veía al tipo que hizo las cosas y me saludaba yo le contestaba, si no me miraba yo tampoco. Eso sí, nunca les dije a mis hijos 'miré, ese fue el que mató a su papá y su hermano. No querían inculcarles odios", recuerda Ligia Castro.*



Son varias las adultas mayores que aún se dedican a la gaaquería, porque nunca accedieron a una pensión. Foto: Tatiana Navarrete

Aunque la mayoría de los sicarios murieron, algunos son hoy adultos mayores que siguen viviendo en la zona. “Acá hay muchos viejos que viven pensando en lo que tuvieron y en lo que fueron, ahora están solos. En la guerra hicieron cosas horribles, pero la gente ya los perdonó. Incluso hacemos ‘vaca’ entre las familias para hacerles mercado cuando no tienen”, cuenta una gaaquera de Cosquez.

El único intento de justicia ocurrió en 1998. Carranza fue capturado bajo los cargos de secuestro y conformación de grupos paramilitares en los Llanos Orientales (donde había adquirido grandes extensiones de tierra) y la Costa Caribe. No fue a la cárcel, sino a la escuela de formación del DAS, y contrató a reconocidos

abogados para su defensa. Pasó casi cuatro años recluso, y a pesar de que en algunas fincas de su propiedad encontraron cadáveres y se revelaron pruebas que lo relacionaban con un grupo paramilitar que operaba en Meta y Vichada, que se conocía como ‘Los Carranceros’, fue absuelto y dejado en libertad con una indemnización de 70 millones de pesos.

“
”

“LA PAZ SE PACTÓ ENTRE LOS QUE ESTABAN PELEANDO. INTERVINO ESCASAMENTE EL ESTADO. FUE BORRÓN Y CUENTA NUEVA, PERO EN NINGÚN MOMENTO HUBO REPARACIÓN NI CASTIGO POR PARTE DEL ESTADO”

Tampoco hubo reparación. Con la puesta en marcha de la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de víctimas y restitución de tierras, las viudas decidieron contar por primera vez lo que les había sucedido ante una autoridad. Sin embargo, ninguna fue reconocida como víctima del conflicto armado.

Para Gladys Prada, directora del área de Registro de la Unidad de Víctimas, el reclamo de las mujeres boyacenses revela un problema complejo. “La ley 1448 reconoce a las víctimas de grupos paramilitares, guerrilleros y de la fuerza pública y esa situación no se enmarca en ninguna de éstas”, explica la funcionaria.

Pese a que la Corte Constitucional ha dicho que pueden ser aceptados otro tipo de hechos,

siempre y cuando guarden una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado en el país, como sucede por ejemplo con las víctimas de las bandas criminales, sus casos exigen un tratamiento específico. *“La línea es muy compleja, por eso toca mirar caso a caso, lo que pasa es que los relatos son muy escuetos y no se puede determinar a veces esa relación cercana y suficiente con el conflicto armado”*, precisa Prada.

Ligia y su familia perdieron su casa después de que fue incinerada y tuvieran que salir, pero tampoco son consideradas víctimas de despojo porque el hecho sucedió antes de 1991 y la Ley no los contempla. *“Claro que eso era conflicto armado, claro que eran grupos armados ilegales, o entonces ¿cómo se le dice a un grupo de 20 tipos que llegaron a varias casas de la vereda con lista en mano matando gente?”*, se pregunta uno de los hijos de Ligia Castro y de Luciano Escárraga.

Así como la justicia y la reparación no fueron prioritarias en la paz verde de Boyacá, tampoco lo ha sido la verdad y la memoria. Los habitantes del Occidente de Boyacá sienten que las investigaciones sobre la ‘guerra verde’ han caído en una suerte de fascinación por las vendettas entre los patrones y sus familias, pero poco en el sufrimiento de los que no estaban insertos en la guerra. Siguen ocultas, por ejemplo, las historias de otras mujeres que no vivieron para contarlas.

La bonanza de esmeralda y el auge del narcotráfico en los ochenta trajeron consigo la apertura de decenas de prostíbulos en los que los mineros gastaban sus fortunas. *“Se trajeron niñas de todo lado, pocas eran de acá de la zona. Más bien*

eran paisas o de Puerto Boyacá, de La Dorada”, cuenta un guaquero de 60 años. Si bien decenas de trabajadoras sexuales salieron de la zona cuando comenzó a escasear la esmeralda, muchas otras fueron asesinadas durante las guerras, pero es un tema que pocos mencionan.

De acuerdo con los relatos de los mineros, era común que los dueños de las minas se “pidieran” siempre las mujeres más “bonitas” que llegaban a trabajar a los prostíbulos. *“Andaban con ellas a todo lado, les regalaban esmeraldas, se notaba porque cambiaban toda la pinta. Pero era unos meses nada más porque luego se aburrían o las niñas se ponían ya muy cansonas, entonces las mataban”*, recuerda un guaquero que pidió la reserva de su nombre, quien asegura que muchos de los cuerpos fueron desaparecidos en lo más profundo de las canteras y otros tantos fueron arrojados a quebradas y ríos de la zona.

El sadismo con el que los mineros trataron a las trabajadoras sexuales nunca fue un secreto. El periodista Pedro Claver Téllez en su libro relata cómo entre ‘patrones’ se regalaban entre sí *“niñas amarradas”* para abusar de ellas.

“SE TRAJERON NIÑAS DE TODO LADO, POCAS ERAN DE ACÁ DE LA ZONA. MÁS BIEN ERAN PAISAS O DE PUERTO BOYACÁ, DE LA DORADA”

Costumbres que perduran

Algunas de las tradiciones heredadas de los ‘patrones’ han cambiado. Ninguna mujer, por ejemplo, niega que el occidente de Boyacá es hoy menos machista de lo que fue en otras épocas. Sin embargo, hay una costumbre que sigue arraigada en algunas familias de la región y que afecta a las mujeres más jóvenes. Popularmente se le conoce como ‘poner sus hijas a pecho’ y significa entregarlas (en la mayoría de los casos venderlas) a los empresarios de las esmeraldas, el valor puede ser mayor si la hija es virgen.

“Acá se ve muchas niñas con hombres mayores que quedan embarazadas a temprana edad, por el dinero de algún rico. Lo hacen las mamás con la mentalidad de que se la vendo a un esmeraldero ella está bien y yo estoy bien”, explica una mujer que pidió la reserva de su nombre. Relato que coincide con el que aparece consignado en el libro de Iván Cepeda: *“para muchas mujeres es un orgullo entregarle las niñas al patrón porque ‘mejora la raza’, la calidad de vida. Todavía existe el derecho de pernada, que es el derecho que tiene el feudal (patrón) de la primera noche con la niña. Se venden y se compran niñas”*.

Esta forma de pensar no es exclusiva de los patrones, también la tienen algunos obreros. Miriam Marroquín cuenta que tuvo que renunciar a su trabajo de cocinera en uno de los cortes de Coscuez por mineros que intentaron abusar de su hija: *“El ambiente con los obreros es pesado, creen*

“SI UNA NIÑA QUE SE CRÍA ACÁ, FUERA DE CONSEGUIR MARIDO, LLENARSE DE HIJOS Y PONERSE A GUAQUEAR, NO PUEDE HACER NADA MÁS. NO HAY ESTUDIO, NO HAY NADA. DE VEZ EN CUANDO LES DAN CURSOS, PERO ¿Y SI NO HAY TRABAJO?”

que pueden manipularle los hijos, quieren que uno les deje a las hijas a cambio de lo que uno consiga el trabajo y eso no es así”.

En el occidente de Boyacá no es extraño ver niñas de 12 o 15 años embarazadas, por lo regular de hombres mucho mayores que ellas. “Todas mis amigas ya tienen hijos, algunas siguen estudiando. En el colegio lo mandan a uno a la comisaria de familia de San Pablo Borbur para que firmemos un papel y el papá del niño no tenga problemas”, explica Karen Castillo, una joven de 18 años que tiene un hijo de 4. Asegura que son las mujeres las que buscan a los hombres, porque si el padre es responsable tener un hijo no resulta un mal negocio.

Aunque han pasado 26 años desde que se firmó la paz, la mayoría de los pueblos en el occidente de Boyacá siguen demandando a un Estado que nunca llega. Los pobladores se quejan de que no envían profesores a los colegios oficiales, de tener que viajar tres horas hasta Chiquinquirá para ser atendidos en un hospital, de las difíciles vías de acceso que quedaron a medio construir y, sobre todo, de que no hay futuro para los jóvenes. “Si una niña que se cría acá, fuera de

conseguir marido, llenarse de hijos y ponerse a guaquear, no puede hacer nada más. No hay estudio, no hay nada. De vez en cuando les dan cursos, pero ¿y si no hay trabajo?”, reclama María Eugenia Orjuela, guaquera de Borbur.

Esta ausencia del Estado ha perpetuado otras costumbres peligrosas de la época de ‘los patrones’. Es común aún, por ejemplo, que los pobladores acudan a una empresa y no ante una autoridad cuando necesitan solucionar un problema. “No tenemos un programa social definido, sino que funciona de forma informal, algo que quedó instaurado desde la época de los que llamaban patrones, entonces si hay una fiesta o hubo un accidente ellos se acercan a la empresa y nosotros miramos si les podemos dar 100 mil o 50 mil pesos”, explica Mauricio Fandiño, gerente de Esmeracol.

En Muzo se creó la Mesa de Dignidad Muzeña, liderada por el actual alcalde, como el intento de algunos líderes por concretar propuestas y peticiones a las empresas minera. Aunque la idea sigue en pie no ha sido fácil mantener los liderazgos. “Éramos 15 y quedamos 4. Se fueron porque les dio miedo, acá existe todavía el mito de que si uno

habla lo matan. Persiste el miedo a organizarse”, afirma Luis Galicia, que ha representado la voz de los guaqueros.

Al respecto, Maximiliano Barbosa, concejal de Coscuez y líder de esa comunidad, asegura que “ya no están los líderes de la plata que mandaban, los famosos patrones, eso se acabó, ahora hay líderes pero comunitarios. Hay gente que está acostumbrada a que sin una pistola no hace las cosas, pero estamos cambiando esa mentalidad”.

Estos nuevos líderes le apuestan, entre otras cosas, a volver al campo, a que las nuevas generaciones regresen a sembrar y trabajar la tierra que sus abuelos abandonaron durante la fiebre de la esmeralda, pues a pesar de que el occidente de Boyacá tiene grandes extensiones de tierra fértil, la mayoría de la comida llega desde Chiquinquirá. “Nos cansamos de ser obreros y queremos que el gobierno lo sepa”, asevera Yolima Cruz, la mujer que lidera a las guaqueras de Coscuez.

Veintiseis años después de firmada la paz verde, las mujeres del occidente de Boyacá que viven en la pobreza le exigen al Estado que por primera vez escuche sus demandas y no solo las de sus ‘patrones’.

“ ”

NO TENEMOS UN PROGRAMA SOCIAL DEFINIDO, SINO QUE FUNCIONA DE FORMA INFORMAL, ALGO QUE QUEDÓ INSTAURADO DESDE LA ÉPOCA DE LOS QUE LLAMABAN PATRONES, ENTONCES SI HAY UNA _ESTA O HUBO UN ACCIDENTE ELLOS SE ACERCAN A LA EMPRESA Y NOSOTROS MIRAMOS SI LES PODEMOS DAR 100 MIL O 50 MIL PESOS, *explica Mauricio Fandiño, gerente de Esmeracol.*



“DESPUÉS DE GRADUARSE DEL BACHILLERATO, MUCHAS JÓVENES VEN LA GUAQUERÍA COMO SU ÚNICA OPCIÓN DE OBTENER INGRESOS”



Las chattarreras, cara femenina de la minería en Segovia

En este municipio del nordeste de Antioquia, el oro ya no es sinónimo de riqueza. Los líos jurídicos con la firma Zandor Capital y la amenaza generada por la presencia de bandas criminales tienen en jaque la minería. Quienes más sufren en ese complejo escenario son ellas.

Por: Ricardo Cruz



*Sentada sobre un bulto lleno de piedras,
Consuelo Castrillón supervisa que las casi
60 mujeres presentes en la mina Las Brisas,
en las afueras de Segovia, se repartan por partes
iguales la montaña de rocas que los mineros
han amontonado en las afueras de la bocamina.*

El nombre de cada una de ellas aparece escrito en un cuaderno que Consuelo guarda con recelo. Parte de su trabajo es, precisamente, regular la cantidad de mujeres que cada día llegan en masa a la mina en busca de un pedazo de piedra para lavar, moler y extraerle unos cuantos granos de oro. Sus responsabilidades también incluyen coordinar las labores de aquellas que cuentan con el visto bueno del gerente de la mina para trabajar; es decir, ella organiza las cuadrillas, revisa que cada una cuente con su balde, su batea, su pala, su costal y su puesto de trabajo.

En Segovia y Remedios, municipios que producen el 11% del oro que se extrae en Colombia según cifras de la Agencia Nacional de Minería, se le dice ‘chatarra’ a la mujer que trabaja día a día en las afueras de las minas escarbando entre montones de piedras que los mineros han desechado. La actividad tiene su recompensa cuando, luego de escoger, lavar y colar, se hallan fragmentos pétreos que contienen mineral que luego son llevados a las plantas de beneficio o entables, como se les dice en la región, para extraerles hasta el último aliento de metal precioso.

EN ESTE MUNICIPIO DEL NORDESTE DE ANTIOQUIA, EL ORO YA NO ES SINÓNIMO DE RIQUEZA. LOS LÍOS JURÍDICOS CON LA FIRMA ZANDOR CAPITAL Y LA AMENAZA GENERADA POR LA PRESENCIA DE BANDAS CRIMINALES TIENEN EN JAQUE LA MINERÍA. QUIENES MÁS SUFREN EN ESE COMPLEJO ESCENARIO SON ELAS.

Se trata, en la mayoría de los casos, de mujeres cabezas de familia, desplazadas por la violencia o que simplemente no encontraron más opciones laborales que dedicarse a ‘chatarrear’. Tampoco es una actividad que distinga edad. No son pocas las mujeres jóvenes que deciden enterrar sus manos entre las duras piedras que sobran de las minas. Todo porque en Segovia y Remedios, las ofertas laborales para las mujeres no abundan: “o se va trabajar en un almacén, un restaurante, en una casa de familia o consigue plata aceptando los ofrecimientos de los hombres y ya sabe de qué estoy hablando”, sostiene María Ofelia, una chatarrera que no supera los 25 años de edad.

Como todo en la minería, “se trata de una aventura donde a veces se puede sacar un castellano (320 mil pesos) en una semana, a veces no queda ni para el pasaje en todo un mes de trabajo. Esto es un trabajo muy duro, dependemos de cómo sea la mina: si es una mina

buena nos va bien, pero si no... pero bueno, ¿qué más hacemos?”, sostiene Consuelo, quien tras poco más de 20 años buscando su fortuna en la chatarra ya puede decir que levantó a sus dos hijos por cuenta de esta actividad.

Su trabajo, como el de todas las chatarreras, depende de la voluntad del dueño de la mina. “Si él autoriza, trabajamos; si dice que no vamos más, pues nos tenemos que ir”. Por eso, en otros tiempos, recuerda la mujer, cuando todo lo que brillaba era oro en Segovia, se podían contar más de 100 chatarreras por mina. Pero hoy, la situación por la que atraviesa la minería en este pueblo tiene a las mujeres dedicadas a esta actividad con los pelos de punta. “Preocupadas estamos todas. Aquí todos los días cierran minas por cuenta de esos contratos con la multinacional; en otras es que están





Ubicado en la región conocida como Alto Nordeste, Segovia es un municipio que cuenta con una población estimada de 40 mil habitantes. De ellos, cerca del 90 por ciento reside en el área urbana.

Foto: Ricardo Cruz

Empresas, detrás del oro

Segovia fue primero Tierradentro y perteneció al municipio de Remedios durante buena parte del siglo XIX. Pero el caserío creció rápidamente gracias a la cantidad de gente que llegó atraída por la explotación aurífera que crecía de manos de los ingleses. Así, mediante el Decreto 851 de 1884, Tierradentro se convirtió en Segovia y desde entonces, la vida social, económica y política de esta localidad ha girado en torno a la minería y a la ya desaparecida empresa *Frontino Gold Mines*.

Se trata de una larga historia de amores, desencuentros, odios y litigios que inició en 1825, cuando llegaron las primeras compañías mineras inglesas a Colombia luego del fin de la guerra de Independencia. Varias de ellas se instalaron en Remedios y Segovia, donde la tierra prodigó metal precioso en cantidades apreciables. Como la explotación auguraba buenos dividendos, el 21 de abril de 1852 se creó formalmente la empresa inglesa Frontino y Bolivia Gold Company, semilla inicial de lo que luego sería la *Frontino Gold Mines*, que además obtuvo del gobierno liberal de

implementando técnicas nuevas de explotación y entonces ya no dan chatarra y en las pocas que dan trabajo no cabemos todas. Aquí por lo menos solo podemos trabajar 60 chatarreras, ni una más ni una menos”, dice Consuelo.

Quizás por ello sienten que no les queda más remedio que apoyar las luchas que viene librando todo el sector minero a través de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, que continúa con sus reivindicaciones

ante la multinacional que hoy operan en la región, pese a que varios de sus principales voceros han sido fuertemente amenazados en el último año.

“ ”

SU TRABAJO, COMO EL DE TODAS LAS CHATARRERAS, DEPENDE DE LA VOLUNTAD DEL DUEÑO DE LA MINA. “SÍ ÉL AUTORIZA, TRABAJAMOS; SI DICE QUE NO VAMOS MÁS, PUES NOS TENEMOS QUE IR.



1825

Llegan las primeras compañías mineras inglesas a Colombia



1852

Se crea formalmente la empresa inglesa Frontino y Bolivia Gold



1884

Tierradentro se convirtió en Segovia por medio del Decreto 851 de 1884



S-XX

El imperio inglés entró en decadencia.



1910

Internacional Mining Corporation compra los activos de los europeos en Antioquia, dándole vida a la Frontino Gold Mines



70”

El surgimiento de las guerrillas trajo mayor tensión a la región y a la empresa



1976

La Frontino Gold Mines se declara en liquidación.

José Hilario López una concesión de explotación a perpetuidad.

Los ingleses implementaron técnicas modernas y desconocidas para esas épocas en Colombia para la explotación del oro de veta. Concentraron actividades en tres frentes de trabajo que en muy poco tiempo adquirieron gran fama por su alta productividad: El Silencio, Providencia y Sandra K.

Los británicos no solo son recordados por abrir por primera vez estas minas, consideradas como las minas de oro de veta más productivas del país; también porque respetaron las exigencias laborales de los mineros. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando el imperio inglés entró en decadencia comenzando el siglo XX. Aparece entonces la empresa estadounidense *Internacional Mining Corporation*, que compra los activos de los europeos en Antioquia en 1910, dándole vida a la *Frontino Gold Mines*.

Los norteamericanos transformaron los modos de gerenciar de los ingleses, así como las relaciones con los trabajadores, lo que generó un intenso malestar laboral que se transformó en una impetuosa lucha sindical que duró décadas y que determinó el carácter beligerante de Segovia y Remedios.

El surgimiento de las guerrillas, en la década del setenta, trajo mayor tensión a la región y a la empresa. La extorsión a la que fueron sometidos los grandes mineros, primero por el Frente 4 de las Farc y luego por el Frente Héroes de Anorí del Eln; el desplome de los precios del oro en los mercados internacionales y las reiteradas declaraciones de la empresa sobre lo costoso de la convención colectiva de trabajadores y la onerosa carga pensional, llevó a la *Frontino Gold Mines* a declararse en liquidación en 1976.

La empresa debió funcionar entonces bajo la figura de concordato por un año. En 1979, los dueños y representantes de los trabajadores firmaron un documento en la ciudad de New York, Estados Unidos, donde constaba que, a partir de entonces, trabajadores y pensionados serían los dueños de la mina.

En su investigación sobre Segovia, del año 2015, el antropólogo Juan David Sierra consignó que “durante la vigencia del concordato la empresa debía crear un fondo de pensiones que garantizara la sostenibilidad financiera de los pensionados y luego ser vendida o recuperada a través la inyección de capital.

Ninguna de las opciones se cumplió y el concordato se extendió durante más de 25 años”.

En 2004, el entonces presidente Álvaro Uribe decidió iniciar la liquidación y venta de la *Frontino Gold Mines*, proceso que vio la luz al final del túnel en 2010, cuando el gobierno nacional vendió todos los activos de la compañía a la multinacional canadiense *Medoro Resources*, en medio de una fuerte disputa jurídica frente a legalidad de la decisión.

Elioberth Castañeda, dirigente de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, tiene serios reparos a la operación comercial: *“nosotros los segovianos hemos sufrido mucho, por parte de la guerrilla, por parte de los paramilitares, ahora por parte de esta multinacional. Nosotros tenemos muchas dudas de cómo compraron la Frontino Gold Mines. No nos genera confianza que muchos directivos de la multinacional han sido ministros, han trabajado en el alto gobierno”*.

En ello no miente. Durante varios años la presidente de la *Zandor Capital*, subsidiaria de la *Medoro* y encargada de la administración de los bienes de la *Frontino Gold Mines* fue María



1979

A partir de este año, trabajadores y pensionados serían los dueños de la mina.



2004

El entonces presidente Álvaro Uribe decidió iniciar la liquidación y venta de la *Frontino Gold Mines*



2010

El gobierno nacional vendió todos los activos de la compañía a la multinacional canadiense *Medoro Resources*.



NOSOTROS LOS SEGOVIANOS HEMOS SUFRIDO MUCHO, POR PARTE DE LA GUERRILLA, POR PARTE DE LOS PARAMILITARES, AHORA POR PARTE DE ESTA MULTINACIONAL. NOSOTROS TENEMOS MUCHAS DUDAS DE CÓMO COMPRARON LA FRONTINO GOLD MINES. NO NOS GENERA CONFIANZA QUE MUCHOS DIRECTIVOS DE LA MULTINACIONAL HAN SIDO MINISTROS, HAN TRABAJADO EN EL ALTO GOBIERNO.



Consuelo Araujo, quien fungió como Ministra de Relaciones Exteriores del gobierno Uribe (2002-2010). Pero el hecho que reafirma las suspicacias de los mineros segovianos fue la captura de Eduardo Otoya, realizada por la Policía el 15 de marzo de este año, en operativos contra minería ilegal en el municipio de Buriticá, occidente de Antioquia.

Otoya fungió como gerente de la *Frontino Gold Mines* en momentos en que se gestaba su liquidación y venta; de ahí pasó a gerenciar la *Continental Gold*, empresa que posee concesiones de explotación minera en Buriticá. Según las pesquisas judiciales,

integraba una red de minería ilegal al servicio de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ que opera en este municipio.

De ahí que muchos en Segovia y Remedios afirmen que desde la llegada de la multinacional muchas cosas han empeorado. Dicen que, desde entonces, la Zandor Capital tiene el control absoluto de la explotación aurífera, condenando a los pequeños y medianos mineros informales a su desaparición.

En estos pueblos del Nordeste antioqueño se viene cocinando un explosivo cóctel que contiene de un lado el malestar de los

mineros con la compañía; y de otro, la compleja situación de orden público generada por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que vienen disputándose las rentas derivadas de extorsión a la pequeña y mediana minería y los jugosos dividendos que está generando el microtráfico.

“O SE VA TRABAJAR EN UN ALMACÉN, UN RESTAURANTE, EN UNA CASA DE FAMILIA O CONSIGUE PLATA ACEPTANDO LOS OFRECIMIENTOS DE LOS HOMBRES Y YA SABE DE QUÉ ESTOY HABLANDO”

Riqueza asediada

Cuando los paramilitares que operaron en el nordeste de Antioquia bajo el mando de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, se desmovilizaron en 2005 en zona rural de Remedios, un reducto de excombatientes decidió continuar en armas controlando la extorsión a decenas de pequeñas minas de oro, pero bajo el nombre de ‘Rastrojos’.

Por aquel entonces, en los municipios vecinos del Bajo Cauca antioqueño ‘Rastrojos’ y ‘Gaitanistas’, nombrados por la gente comúnmente como ‘Urabeños’, sostenían una cruenta guerra por el control del territorio. La intensa confrontación solo se logró conjurar promediando el 2012, gracias a un acuerdo entre combatientes que se conoció como “el pacto del fusil”.

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, Regional Antioquia, en su Informe de Riesgo No. 002-12A.I, de abril de 2012, señaló que “se conoció de un supuesto acuerdo entre los grupos armados postdesmovilización conocidos como ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ según los cuales los primeros ejercerían control del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, mientras que los segundos trasladarían su fuerza y estructura armada al sur del país”.



“
”

FUERON MUCHAS LAS MUJERES QUE FUERON ASESINADAS EN ESA GUERRA, SOLO POR EL HECHO DE TENER AMISTAD O SER NOVIA DE UN MIEMBRO DE LOS ‘HÉROES DEL NORDESTE’. PERO EN ESTE MUNICIPIO NO QUEDA REGISTRO DE NADA.

El interés de los 'Gaitanistas' de controlar Segovia y Remedios terminó siendo la chispa que desató una guerra sin cuartel en estos municipios, pues se toparon con una disidencia de 'Los Rastrojos' denominada "Héroes del nordeste", quienes se negaron a abandonar el control de sus actividades ilegales en estas localidades por una razón fundamental: eran de la región, habían nacido, crecido y se hicieron paramilitares en Segovia y Remedios.

La confrontación armada, que se extendió por cerca de año y medio, no respetó ni edad, ni género, ni condición social. Tal como lo consignó el SAT de la Defensoría, Regional Antioquia, en su informe de riesgo, se trató de una violencia dirigida principalmente a los mototaxistas, acusados de transportar insumos e información para los bandos en disputa; a los mineros tradicionales y comerciantes que se oponían al pago de extorsiones; a los más jóvenes, presionados para que ingresaran a uno u otro grupo; y las mujeres y sus familias, señaladas por sostener relaciones sentimentales con miembros de la fuerza pública o con "el enemigo".

Marta*, funcionaria pública que pidió reserva de su identidad y quien debió atender situaciones humanitarias en ese tiempo, fue testigo de este tipo de vejámenes: *"fueron muchas las mujeres que fueron asesinadas en esa guerra, solo por el hecho de tener amistad o ser novia de un miembro de los 'Héroes del Nordeste'. Pero en este municipio no queda registro de nada. 'Los 'Gaitanistas' no solo se enfocaron en asesinar a los integrantes militares*

propia, sino también en atacar a sus familias, en echarlos del pueblo. Fue muy usual que asesinaran a la esposa, la hermana, la novia de un integrante de 'Héroes del Nordeste', para generar el desplazamiento de esa familia".

La fuerza pública propinó duros golpes a los 'Héroes del Nordeste'. El más contundente fue la muerte de su máximo líder, Walter Manuel Ramos, alias 'Alex 15', hecho ocurrido en marzo de 2013. El 25 de mayo de ese mismo año fue capturado por agentes de la Policía Nacional Miguel Ángel Ospino, alias 'Palagua', segundo al mando del grupo, lo que puso punto final a la confrontación, dejando como vencedor a los 'Gaitanistas', lo que supuso además que decenas de familias abandonaran el pueblo en silencio ante el temor de presuntas represalias contra ellos.

Una tensa calma se extendió por todo Segovia y Remedios. Hasta principios de este año, cuando reaparecieron los enfrentamientos, los asesinatos, el

"LO QUE ESTÁ EN DISPUTA AQUÍ ES EL TERRITORIO. DICEN QUE SEGOVIA SE VOLVIÓ MUY BUENA PLAZA PARA EL MICROTRÁFICO, PORQUE HAY MUCHO CONSUMO ENTRE LOS JÓVENES; ADEMÁS DE LAS EXTORSIONES DE QUE SON OBJETO LOS COMERCIANTES Y LOS MINEROS TRADICIONALES"

miedo. *"A principios de este año se registraron unas alteraciones de orden público por la presencia de bandas criminales aquí en el casco urbano. Se presentaron muchos homicidios, muchos desplazamientos. La cosa ha disminuido, pero no significa que ya desapareció",* señala Yeison Atehortúa, personero de Segovia, quien reconoce que "nos dimos cuenta de la magnitud de la problemática porque desde Medellín nos indagaron qué estaba pasando en el municipio que estaba llegando mucho desplazado de Segovia".

El resurgir de la violencia también ha tenido su componente psicológico. Desde enero han circulado decenas de panfletos donde se amenaza de muerte a mineros tradicionales, comerciantes, líderes sociales, jóvenes. Muchos de ellos aparecieron firmados por 'Nueva Generación', que, según información de las autoridades, *"sería una disidencia de los 'Héroes del Nordeste' y operarían únicamente aquí en Segovia",* tal como lo explica el Personero municipal.

Sin embargo, el que nuevamente se haga público el nombre de 'Héroes del Nordeste' tiene bastante inquieta a la población, porque *"ya no se sabe si son dos o tres grupos armados los que quieren disputarse el control del territorio, porque se menciona a la Nueva Generación, los 'Gaitanistas' y ahora este otro*

"NOS DIMOS CUENTA DE LA MAGNITUD DE LA PROBLEMÁTICA PORQUE DESDE MEDELLÍN NOS INDAGARON QUÉ ESTABA PASANDO EN EL MUNICIPIO QUE ESTABA LLEGANDO MUCHO DESPLAZADO DE SEGOVIA"



**“YO DIRÍA QUE SOLO EL 10%,
SIENDO MUCHO, ME DIJERON
QUE LES GUSTABA ESE**

**TRABAJO... PERO LO HACEN
PORQUE, ¿QUÉ MÁS HAY PARA
HACER EN SEGOVIA?**

grupo”, explica el funcionario, quien asegura que “lo que está en disputa aquí es el territorio. Dicen que Segovia se volvió muy buena plaza para el microtráfico, porque hay mucho consumo entre los jóvenes; además de las extorsiones de que son objeto los comerciantes y los mineros tradicionales”.

El ocaso de la minería

“Hace ratito ya, llegaron los tales ‘Gaitanistas’ esos a cobrarme vacuna. Me pidieron dos millones de pesos. Yo les dije que si les pagaba todo eso pues simplemente tenía que cerrar la mina. Al fin pude transar en 500 mil pesos. Luego, este año, llegaron unos que no sé cómo se llaman diciéndome: ‘cómo usted les paga tanto a ellos, nos tiene

que pagar lo mismo a nosotros. Ahora sale que llegaron los tales ‘Héroes del Nordeste’ y de seguro, también llegarán a vacunar. Y así no se puede”, cuenta Ovidio*, propietario de una pequeña mina en las afueras de Segovia.

En ella trabajan directamente unas 30 personas. Pero la minería es una actividad cuyos vínculos se extienden mucho más allá del socavón. “De la mina también dependen las chatarreras, los arrieros, los turbineros, en fin, es una cadena bastante larga que si uno suma, son más de 50 personas”, explica el minero.

Quizás por ello, cuando se le indaga por el futuro de esta actividad en su rostro se dibuja una mueca de profunda preocupación. No es para menos. Desde que se instaló en Segovia, la banda criminal al mando de alias ‘Otoniel’ se apoderó del comercio de un elemento vital para la

minería en este pueblo y que le está reportando grandes dividendos: la dinamita. “Esos ‘Gaitanistas’ saben quiénes pueden acceder a la dinamita; o sea, quienes tienen licencia de explotación. Entonces, a ellos les dicen: ‘usted me va vender la dinamita solo a mí a tanto’. Los que no tenemos acceso a dinamita tenemos que comprársela a ellos, a lo que nos pidan, que siempre es tres veces más”, agrega el minero.

A esto se suma el cambio de condiciones laborales para cientos de medianos y pequeños mineros desde que la Zandor Capital asumió el control de todos los activos de la *Frontino Gold Mines*. Años atrás, cuando la Frontino aún estaba bajo el control de los trabajadores, cientos de pequeños y medianos mineros solían explotar en la más completa informalidad múltiples socavones abiertos en tierras de la empresa sin mayores complicaciones. Unos y otros



pactaban repartir los hallazgos en bruto en porcentajes que fueron equitativos. Eran años en que había oro para “dar y convidar”.

Pero el gobierno nacional vendió la empresa y la multinacional llegó cerrando todos los socavones abiertos en sus tierras. Para evitar desaparecer como pueblo, los mineros informales crearon en 2015 la Mesa Minera de Segovia y Remedios con el fin de negociar condiciones laborales con la Zandor Capital. La empresa propuso los famosos contratos de asociación; es decir, la tercerización de la explotación de las minas de la multinacional en manos de asociaciones privadas creadas por los propios mineros tradicionales.

Pero el remedio resultó peor que la enfermedad. “Los tales contratos de asociación nos están llevando a la ruina. Uno explota el socavón, lleva la mina en bruto a la planta de beneficio de la multinacional y

salen con que solo produjo, por decir algo, 10 gramos de oro por kilo. Uno lleva el mismo material a analizar a otro laboratorio y el resultado es 35 gramos de oro por kilo. Con todos los mineros está pasando eso y entonces, a la hora de liquidar, al minero no le está quedando nada”, explica Ovidio.

Las extorsiones por parte de las bandas criminales, sumado a los problemas derivados de la relación con la multinacional, tiene en serios aprietos la actividad económica por excelencia de esta región. Según estimativos de la Mesa Minera de Segovia y Remedios, antes de la llegada de la Medoro Resources existían más de 250 pequeñas minas, que empleaban más de 30 mil personas. Hoy, hay en funcionamiento poco más de 60, en las cuales laboran algo así como 12 mil mineros.

El problema es que, si la minería continúa con su caída libre como viene sucediendo hasta hoy, toda una larga cadena de personas que dependen de esta actividad verá seriamente afectada su calidad de vida porque, sencillamente, en Segovia y Remedios no hay nada más que hacer. Y, como toda cadena tiene sus eslabones más débiles, cientos de mujeres segovianas conocidas como las chatarreras miran con preocupación un futuro que se ve tan oscuro como la entrada a un socavón.

“
”

**DE LA MINA TAMBIÉN
DEPENDEN LAS
CHATARRERAS, LOS ARRIEROS,
LOS TURBINEROS, EN FIN,
ES UNA CADENA BASTANTE
LARGA QUE SI UNO SUMA,
SON MÁS DE 50 PERSONAS.**

Un ángel entre los escombros

Por fortuna, las chatarreras encontraron en una joven mujer el “ángel” que preocupe por ellas. Se trata de Ruth Ospina, quien aún recuerda el día en que, sin quererlo, terminó siendo la única mujer integrante de la Mesa Minera de Segovia y Remedios. Sucedió un día de enero de 2015. Los pequeños y medianos mineros informales estaban reunidos en el Colegio Diocesano, planeando la creación de una instancia que los aglutinara y los representara en las duras discusiones que se avecinaban con la multinacional.

Los mineros ya se disponían a elegir sus delegados cuando Ruth levantó la mano para pedir el uso de la palabra. Con el desparpajo que la caracteriza, se subió al escenario, tomó el micrófono y dijo ante un público netamente masculino: *“todos se mostraban preocupados por el cierre de las minas, por los contratos, que por esto y lo de más allá. Y sí, era –y es– muy preocupante, pero yo les dije: ‘señores, estas mujeres, las chatarreras, son las más vulnerables y necesitamos que también piensen en ellas’”*.

Fue así como ese día de enero de 2015, Ruth terminó integrando la Mesa Minera en representación de las chatarreras. *“Mi relación con ellas es muy fuerte porque yo también lo fui. Cuando tenía 15 años, al ver que mi padre no podía mantenernos a todos nosotros, que somos ocho en total, pues me fui a chatarrear a una mina. En esas estuvo dos años y me di cuenta lo pesado que es ese trabajo”*.



En las pasadas elecciones regionales, Ruth Ospina postuló su nombre al Concejo de Segovia por el Partido Verde, donde aspiraba continuar con su trabajo en favor de las chatarreras. Si bien obtuvo un número importante de votos, el umbral del partido no le permitió acceder a una curul. Foto: Ricardo Cruz

Aunque para aquel entonces tenía tan solo 20 años, la joven se tomó muy en serio su trabajo: *“comencé una caracterización sobre las mujeres chatarreras. Alcancé a realizar un diagnóstico de 100 de ellas. Encontré que el nivel educativo en ellas era muy bajo; que por lo general son mujeres cabezas de hogar, abandonadas por sus esposos o algunas son víctimas de la violencia, con más de tres o cuatro hijos bajo su responsabilidad”*.

En sus indagaciones, Ruth reafirmó lo que las chatarreras dicen entre murmullos y lamentos: *“yo diría que solo el 10 por ciento, siendo mucho, me dijeron que les gustaba ese trabajo. De resto todas*

señalaban que era un trabajo muy pesado, que es muy duro porque toca trabajar casi parejo como lo hombres, en ambientes pesados donde a veces no falta el hombre que se quiere sobrepasar. Pero lo hacen porque, ¿qué más hay para hacer en Segovia?”

Aunque la vida de hombres y mujeres en pueblos como Segovia y Remedios gira completamente en torno a la minería y lo que pase en ese renglón económico afecta a todos por igual, la lucha por su defensa ha tenido, históricamente, un carácter masculino y eso Ruth no solo lo comprendió rápidamente, también lo padeció.

“Me ha tocado pelear mucho con la Mesa (Minera), porque, claro, las chatarreras solo son importantes cuando se hacen plantones o se programan actividades y necesitan quien cocine. Y yo soy diciéndoles que no, que la

cosa no es así, pero es una lucha que he dado sola y no he logrado cambiar esa actitud”, afirma la líder.

Actualmente, a través del proyecto Somos Tesoro, iniciativa de la Fundación Mi Sangre, la Alianza por la Minería Responsable, el Fondo Acción y Pact, la joven ha logrado impulsar varias iniciativas de huertas caseras que benefician a varias mujeres chatarreras y sus familias y viene gestionando la creación de una fábrica de arepas.

“Es que a las chatarreras son las que más les vulneran sus derechos, hasta en el mismo municipio: cuando en la mina ven que los residuos que le entregaban a las mujeres tienen buen mineral, prefieren explotarlo y, ¿qué pasa?, que ellas se tienen que ir a otra mina a buscar trabajo. Por eso estamos buscando generar otras opciones de empleo”, reitera Ruth,

Este año su vida dio un giro inesperado. El alcalde Gustavo Tobón la nombró Coordinadora de Juventud y ahora su tiempo debe ocuparlo en las actividades que demandan su cargo. Sin embargo, no descuida su labor de acompañamiento a las chatarreras. Se trata sin duda de una apretada agenda que poco espacio deja para el esparcimiento.

“Yo no soy mucho de fiestas y parrandas y cosas de esas. Todo mundo creería que todos los segovianos y más las mujeres somos así, fiesteros; pero no. Hay mucho mito sobre el pueblo, sobre las cosas que pasan aquí, sobre las mujeres, pero lo que pasa aquí no es nada distinto de lo que pasa en otros lados”, sentencia esta mujer que no se cansa de repetir lo orgullosa que se siente de ser segoviana.



“LAS SEGOVIANAS TENEMOS FAMA DE BRUJAS, DE QUE SOMOS ‘CONTENTAS’, ENTONCES UNO SALE A OTROS PUEBLOS Y LA GENTE CREE QUE SOMOS FÁCILES O QUE ESTE ES UN PUEBLO LLENO DE PROSTITUCIÓN, PERO NO ES ASÍ”

Mujeres del futuro

En el parque principal de Segovia, en medio del tumulto que suele congregarse en las tardes de domingo, una mujer invita a los transeúntes a acercarse a un pequeño puesto donde dos indígenas Emberá-Chamí exhiben lo mejor de sus artesanías. Su nombre es Yurian Álvarez, una medellinense que por motivos de trabajo llegó en 2004 a Segovia y decidió quedarse a vivir allí, fascinada “por la diversidad cultural de este pueblo, por esa alegría, esa amabilidad y esa espontaneidad de los segovianos”.

Segovia es un municipio que constantemente está recibiendo gente de todas partes, que llegan

atraídos por las fábulas construidas en torno a impresionantes hallazgos de oro. Pero todo el que llega encuentra que hacer, como dice Yurian, que desde que se instaló en esta localidad ha trabajado en proyectos culturales de diversa índole, pero siempre dirigidos a los más jóvenes.

“La idea es fortalecer el proyecto de vida de los chicos a través de expresiones artísticas como el teatro y la danza”. Actualmente trabaja en el proyecto Somos Tesoro, iniciativa de la Fundación Mi Sangre, la Alianza por la Minería Responsable, el Fondo Acción y Pact, el cual busca reducir el trabajo infantil en zonas mineras de Colombia, una de ellas, el distrito minero que conforman Segovia y Remedios

“Ser joven en Segovia no es fácil y Yurian lo sabe por experiencia propia. Hoy día impulsa grupos de teatro y otras actividades lúdicas entre jóvenes de los últimos grados de bachillerato de los establecimientos educativos públicos, donde los niveles de deserción de los varones son bastante elevados: “los *pelados desde muy jóvenes quieren tener plata o de verdad les toca trabajar y se van para las minas a ‘catanguiar’*. Aquí se le dice ‘catanguiar’ al trabajo de sacar bultos llenos de piedra de la mina cargados sobre la espalda. ¡Es durísimo! Nuestro trabajo es mostrar otras opciones distintas a la minería o que por lo menos terminen el estudio. Pero es difícil, porque esta cultura es cien por ciento minera y, como dicen por aquí, la minería es una aventura: a veces ganas mucho, a veces no ganas nada”.

Las mujeres jóvenes segovianas tienen que enfrentar sus propias complejidades, quizás la más fuerte, el estigma que pesa sobre ellas.

“Las segovianas tenemos fama de brujas, de que somos ‘contentas’, ¿me entiende? Y cómo aquí hubo un alcalde hace poco que se hizo famoso en internet por hablar de las mujeres de Segovia, entonces uno sale a otros pueblos y la gente cree que somos fáciles o que este es un pueblo lleno de prostitución, todo por cuenta de tanto mito que se han construido sobre el pueblo, pero no es así”, cuenta a su vez Luz Ana Valdés, de 22 años de edad, quien ostenta el mérito de ser la primera joven segoviana elegida como la Mujer Talento de Antioquia.

“

LOS PELADOS DESDE MUY JÓVENES QUIEREN TENER PLATA O DE VERDAD LES TOCA TRABAJAR Y SE VAN PARA LAS MINAS A ‘CATANGUIAR’. AQUÍ SE LE DICE ‘CATANGUIAR’ AL TRABAJO DE SACAR BULTOS LLENOS DE PIEDRA DE LA MINA CARGADOS SOBRE LA ESPALDA. ¡ES DURÍSIMO! NUESTRO TRABAJO ES MOSTRAR OTRAS OPCIONES DISTINTAS A LA MINERÍA O QUE POR LO MENOS TERMINEN EL ESTUDIO. PERO ES DIFÍCIL, PORQUE ESTA CULTURA ES CIEN POR CIENTO MINERA Y, COMO DICEN POR AQUÍ, LA MINERÍA ES UNA AVENTURA: A VECES GANAS MUCHO, A VECES NO GANAS NADA.

Ocurrió en 2012. El entonces gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, se ideó un concurso para reemplazar los tradicionales concursos de belleza, premiando esta vez el talento, el liderazgo, la disciplina y el valor de las mujeres jóvenes de las regiones antioqueñas. Cuando la Gobernación de Antioquia abrió las convocatorias regionales para el concurso, todos en Segovia vieron en la reconocida líder juvenil como una opción real de triunfo.

Y así fue: “Estando en el colegio, conformé con otros compañeros un grupo de recreación comunitaria. Vinculé a la Personería y entonces, hicimos actividades de recreación con niños, niñas, adolescentes por todo el pueblo. Llevaba un año en esas cuando apareció el concurso y me presenté: primero me presenté en el municipio y gané; luego concursé con otras chicas del nordeste y gané; y ya competí a nivel departamental y gané”.

Su reconocimiento fue en la categoría de “Liderazgo social y político”. Desde ese momento se convirtió en orgullo para aquellas mujeres segovianas que construyen un proyecto de vida por fuera de la minería, algo que, en este pueblo, no es nada fácil: “desafortunadamente hay jóvenes y en especial mujeres muy ‘contaminados’ por la cultura del dinero. Y entonces, no piensan sino en conseguir plata, ya sea en las minas o como sea”.

Su vocación comunitaria sigue intacta. Actualmente trabaja con los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en el corregimiento de Fraguas, o Machuca, como le dice la gente. Para Luz Ana, como todos los nativos de este pueblo, Segovia lo es todo: “este es un municipio alegre, rico, de gente buena; pero también es un pueblo que no ha sabido aprovechar su riqueza”.



**“ESTANDO EN EL COLEGIO, CONFORMÉ
CON OTROS COMPAÑEROS UN GRUPO DE
RECREACIÓN COMUNITARIA. VINCULÉ A
LA PERSONERÍA Y ENTONCES, HICIMOS
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN CON
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES POR
TODO EL PUEBLO.”**

*La empresa Zandor Capital
ha solicitado varios amparos
administrativos (órdenes de cierre)
sobre varias minas del municipio,
entre ellas El Cogote, La Melliza y Las
Brisas, tres de las más importantes del
municipio por el número de mineros
que emplean. Foto: Ricardo Cruz*



“Matamberas”

la red que sostiene
la identidad afro de
Timbiquí

En ese municipio del Pacífico caucano las mujeres han jugado un papel vital para mantener el tejido social y preservar las tradiciones culturales. Lo hacen en medio del abandono estatal, el conflicto armado, las economías ilegales y el machismo.

Por: Andrés García



“No podemos ser tan irresponsables para acabar con todo lo que tenemos y no dejarle nada a la gente que viene. Tenemos que pensar en eso y es un papel importante y preponderante de las mujeres, porque nosotras somos las que tenemos que ver con la recreación de la vida”, afirma con la valentía que la distingue una de las líderes del municipio de Simbiquí, en el departamento de Cauca.



Es la filosofía que impulsa las labores de un grupo de mujeres que trabaja incansablemente, en medio de las vulneraciones causadas por el abandono estatal, el conflicto armado y las economías ilegales, con el ánimo de impedir que se pierdan sus tradiciones culturales y que se resquebrajen más lazos de la comunidad. Todas ellas hacen parte de la Red de Organizaciones Femeninas del Pacífico Caucaño Matamba y Guasá. Adoptando los nombres de instrumentos musicales del Pacífico, 22 organizaciones comunitarias, que suman alrededor de 500 integrantes, se unieron desde 1993 para trabajar conjuntamente y hacerle frente a las adversidades.

En un principio, cuando el conflicto armado y las economías ilegales se encontraban por fuera de sus territorios, los objetivos de esta red eran trabajar por las reivindicaciones de las mujeres y lograr la seguridad alimentaria de sus familias. *“Nos unimos para garantizar nuestra alimentación y que fuera sana; para defender nuestros derechos. En nuestra trayectoria sabemos que la mujer ha sido muy marginada y nuestro interés*

era unirnos para salir adelante en las cosas que queremos hacer”, explica Tomasa Benté, presidenta de la organización Regocijo de Amor, que está compuesta por 15 mujeres, varias de ellas víctimas de desplazamiento forzado.

En ese sentido, uno de los puntos fuertes de la red fue el trabajo con los cultivos de pancoger. Organizaciones como Mujeres en Pie, Las Playadoras, El Cebollal, Las Albahacas y Acencupa, se enfocaron en el cultivo de verduras y hortalizas para garantizar que no faltaran los alimentos y hacer trueques.

“Estamos trabajándole a las azoteas, sembrar para no dejar caer la tradición, porque eso era lo que hacían nuestros ancestros, ellos cultivaban y no compraban nada. Todo era de nuestro medio y no queremos que se acabe esa tradición. Cultivar sin nada de químicos”, señala María*, una de las líderes de la comunidad, quien ha padecido la guerra en su mayor intensidad.

A partir de 2005, con la llegada de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y, posteriormente, con la irrupción de la minería ilegal, la red tomó una nueva función: preservar sus tradiciones culturales a pesar de los desplazamientos forzados y de los cambios en su vida cotidiana causados por los foráneos que se empezaron a asentar en la región. *“Por la minería y la coca la gente dejó de lado sus prácticas ancestrales y está dedicada a la búsqueda de la plata fácil. Ahora mantienen pendientes de cuándo es que llegarán las ‘retros’ (retroexcavadoras) y descuidamos las prácticas tradicionales”,* plantea la profesora Carmen*, quien agrega que las mujeres están rescatando sus tradiciones porque a los hombres les interesa muy poco: *“agricultores quedan pocos, se ven uno o dos, los demás están en la minería, están pendientes de barequear y lo ancestral ha pasado a otro plano”.*



NOS UNIMOS PARA GARANTIZAR NUESTRA ALIMENTACIÓN Y QUE FUERA SANA; PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS. EN NUESTRA TRAYECTORIA SABEMOS QUE LA MUJER HA SIDO MUY MARGINADA Y NUESTRO INTERÉS ERA UNIRNOS PARA SALIR ADELANTE EN LAS COSAS QUE QUEREMOS HACER.



“POR LA MINERÍA Y LA COCA LA GENTE DEJÓ DE LADO SUS PRÁCTICAS ANCESTRALES Y ESTÁ DEDICADA A LA BÚSQUEDA DE LA PLATA FÁCIL. AHORA MANTIENEN PENDIENTES DE CUÁNDO ES QUE LLEGARÁN LAS ‘RETROS’ (RETROEXCAVADORAS) Y DESCUIDAMOS LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES”

Una de las situaciones que más lamentan en la red de mujeres es la de la resistencia de los jóvenes a vivir las tradiciones de las comunidades. “Los cuentos, los chistes y otras dinámicas de atrás

se perdieron porque los jóvenes mantienen metidos en el celular”, cuenta Benté. “En el pasado, en las noches de luna, se prendían fogatas y alrededor de ella se contaban chistes y se hacían rondas, se mantenía la tradición oral de nuestros ancestros; se tomaba agua aromática con todas las plantas del medio. Esas tradiciones se han perdido porque ha entrado mucho foráneo y los jóvenes aprenden de ellos”.

El reto que se han propuesto ‘Las Matamberas’ es evitar que los jóvenes olviden esas prácticas ancestrales, por ello, asegura, Benté, “las mujeres empezamos a trabajar en ese campo. Es que los viejos no estamos prestos para dejar que eso no suceda”.

Para garantizar ingresos económicos, estas mujeres acudieron a la siembra de plantas

Las mujeres y los ríos son los encargados de velar por la vida de las comunidades afro. Foto: Andrés García.

medicinales y aromáticas que son comercializadas en el casco urbano de Timbiquí. Además, cada cierto tiempo se reúnen para cocinar platos tradicionales y realizar artesanías, que son vendidos en el parque central de la cabecera municipal. También realizan presentaciones folclóricas y para que no se pierda la tradición tocan y bailan buga y bambuco, entre otros ritmos que esconde el Pacífico.

El trabajo comunitario de ‘Las Matamberas’ es de alto riesgo si se considera la vulnerabilidad de la región dada la presencia de grupos armados ilegales, la ausencia del Estado y las afectaciones que causa vivir bajo la dinámica de economías ilegales.

RED DE ORGANIZACIONES FEMENINAS DEL PACÍFICO CAUCANO MATAMBA Y GUASÁ

MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ, CAUCA

N ^a	Organización	Comunidad	Inte-gran-tes	Propósitos	Acciones
1	Apoyo a la Mujer	Cabecera Mpal	13	Visibilizar el papel de la mujer. Empoderamiento político, social, productivo y cultural de las mujeres	Fortalecimiento organizativo. Autonomía y soberanía alimentaria Reafirmación étnica, cultural y territorial
2	Amantes de la paz	Cabera Mpal	14	Propiciar sentido de pertenencia y fomento de la paz familiar y entre las mujeres	Encuentros Formación Cultura como medio de vida
3	Regocijo de Amor	Cabecera Mpal	15	Apoyo a la infancia y adolescencia	Alfabetización a niños y adolescentes Cultivo y siembra de productos de pancoger
4	Mujeres luchadoras	Cabecera Mpal	18	Diseño y elaboración de artesanías de uso	Cultivo de materia prima Promoción, encuentros y eventos culturales
5	Reconstruyendo Futuro	Cabecera Mpal	11	Artesanías de uso Promoción y venta gastronomía típica	Recuperación de recetas tradicionales Promoción y venta de comidas típicas Talleres gastronómicos
6	Mujeres Visibles	Cabecera Mpal	21		
7	Pers.Cambio y Vida	Cabecera Mpal	18	Cualificar la educación a través de la Etnoeducación y el Etnodesarrollo	Diseño y elaboración de un currículo Eventos etnoeducativo Emprendimientos culturales
8	Los Hijos de la Tierra	Cabecera Mpal	15	Promover los estilos de vida saludables	Rutina de ejercicio Capacitaciones Aumento de consumo de agua en la población estudiantil Promoción de comidas sanas
9	URAMBA	Cabecera Mpal	13	Promoción de la cultura	Grupo de danzas
10	Comité ecológico	Cabecera Mpal	23	Desarrollo agropecuario	Formación agrícola (siembra de musáceas, raíces y tubérculos y árboles frutales) Pecuarías cría de especies menores
11	Las Albahacas	Calle del Pueblo	25	Cultivo, siembra y manejo pos cosecha de plantas alimenticias, aromáticas y medicinales	Capacitación en BPA de las Plantas AMA Venta de plantas AMA
13	El Cebollal	San Miguel	25	Cultivo de pancoger Tienda comunitaria	Agricultura orgánica Intercambio de semillas
14	La Unión	Mataco	15		
15	El Orégano	Fragua	18		
16	Las Mandingas	Velásquez	14		
17	Las Playadoras	Chete	18	Cultivos de pancoger Tienda comunitaria	Comida orgánica Intercambio de saberes Intercambio de semillas
18	Naturaleza y Salud	Coteje	25		
19	Mujeres en Pie	San José	27	Panadería y cultivos de panoger	Venta de panes y promoción de productos de la región. Venta de productos orgánicos
20	ACENCUPA	Santa María	54	Medicina Tradicional Cultivos de pancoger	
21	La Fortaleza	Brazo Corto	23	Concheras	Venta de mariscos
22	Poniendo y ahorrando	Corozal	27	Ahorro	
23	Red Matamba y Guasá	Municipio	22 org.	Fortalecimiento cultural productivo y político de las mujeres	Evaluación y planeación conjunta Gestión Cohesión organizativa Promocionar el trabajo de las mujeres y de las organizaciones

Marginación y resistencia

“A mí me llenó de mucha indignación ver a la gente marchar por las calles del pueblo hasta la Alcaldía protestando y defendiendo a la minería con retroexcavadoras. Entiendo que con eso se está haciendo un gran daño al territorio, pero esa es la única fuente de ingresos que tienen muchas familias en estos momentos. El Estado nos ha dado la espalda y cuando viene es con una represión enorme”, cuenta Estela*, una líder comunitaria.

La mujer hace referencia a la movilización pacífica que ocurrió en el casco urbano de Timbiquí, tras los operativos que realizaron la Fuerza Pública y la Fiscalía el pasado 15 de agosto en la zona alta del río con cuyo nombre fue bautizado el municipio. En esa ocasión fueron destruidas 26 retroexcavadoras y capturadas dos personas. Según reportes de las autoridades y de varios medios de comunicación, en esos hechos se asestó un fuerte golpe a las finanzas de la guerrilla del Eln, que se lucraba de la explotación “criminal” del oro de la región.

Sin embargo, otra es la versión de las comunidades de diferentes veredas asentadas a las orillas del río Timbiquí, quienes insisten en que las máquinas quemadas eran de nativos que han dejado de lado la minería artesanal para recurrir a esa práctica que es más efectiva. “Quemaron las máquinas de los nativos y no las de los foráneos. Esa es la contienda que hay, la gente está buscando que saquen a los foráneos y se queden los nativos”, cuenta un poblador de la región que fue testigo, afirma, del “desmedido



Las comunidades ubicadas sobre los ríos son las más afectadas por el abandono estatal.
Foto: Andrés García.

accionar del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía) que lanzó gases y agredió a la comunidad sin previo aviso y en presencia de los niños”.

Además, reiteran que en la región sólo hace presencia la guerrilla de las Farc: “Acá no hay Eln. Se equivocan porque aquí sólo hay un grupo armado y por eso no hay enfrentamientos. Eso del Eln es falso, lo hacen para aumentarle al noticiero o para ocultar los atropellos que le hicieron a la comunidad”, expresa otro lugareño.

Más allá de las versiones encontradas, el operativo realizado en agosto pone de presente la triste realidad de algunas comunidades afro de Timbiquí. Ante el abandono estatal, la llegada de la minería con maquinaria pesada por parte de “foráneos” y el control de las Farc, muchas personas han dejado de lado la minería artesanal y la protección de sus territorios para satisfacer sus necesidades básicas por medio de la minería pesada.

El dilema de la minería es una muestra de la gran paradoja que encierra Timbiquí: a pesar de tener un territorio rodeado

de una vasta riqueza natural, la mayoría de sus habitantes viven en situación de pobreza y carecen de los servicios básicos para subsistir dignamente.

Con una población cercana a los 22 mil habitantes, la mayoría pertenecientes a comunidades étnicas -el 77 por ciento afrodescendiente y el 10 por ciento indígena- que viven en la zona rural, Timbiquí se encuentra recostado sobre el océano Pacífico, entre los municipios de Guapí y López de Micay. Sus 1.813 kilómetros cuadrados de extensión están bañados por los ríos Timbiquí, Saija y Bubuey, que alimentan el tape verde de bosque tropical que la da vida a casi la totalidad del territorio.

Por su composición geográfica y variedad ecológica, Timbiquí goza de unas condiciones envidiables para la pesca, la agricultura

“
”

QUEMARON LAS MÁQUINAS DE LOS NATIVOS Y NO LAS DE LOS FORÁNEOS. ESA ES LA CONTIENDA QUE HAY, LA GENTE ESTÁ BUSCANDO QUE SAQUEN A LOS FORÁNEOS Y SE QUEDEN LOS NATIVOS

y la minería, de la que además de oro, se puede extraer plata, plomo, hierro, manganeso, níquel, platino, cobre y zinc. No obstante, tanta riqueza no se traduce en beneficios para sus habitantes.

La mayoría de los pobladores carecen de acueducto y agua potable, razón por la cual deben recoger agua de la lluvia que almacenan en enormes contenedores de plástico donde, además, se incuban mosquitos que generan riesgos para la salud; tan sólo en el casco urbano hay fluido eléctrico las 24 horas del día, en la zona rural se da en horas de la noche. Además, pululan el desempleo y el empleo informal.

El panorama en situación de vivienda es desalentador. En su Informe Estructural: Situación de Riesgo por Conflicto Armado en la Costa Pacífica Caucana, de 2014, la Defensoría del Pueblo encontró que las casas de zona rural son en su mayoría palafíticas que “no cuentan con servicio sanitario, pozo séptico o conexión a alcantarillado, agua potable y servicio de energía eléctrica”; y en el casco urbano “han proliferado viviendas construidas con materiales reciclables, como cartones y plásticos” que “conforman los barrios de invasión de Bellavista y Puerto Luz, y no poseen servicios públicos ni saneamiento básico”.

Los timbiquireños coinciden en que las causas de esa dramática situación son la falta de empleo formal y la ausencia efectiva del Estado. Para Celmira Ordóñez Herrera, la alcaldesa encargada del municipio, el olvido en el que se encuentra sumido Timbiquí también ha sido causado por la clase política caucana.

“A PESAR DE LA EXTRACCIÓN CON MAQUINARIA Y QUÍMICOS, ALGUNAS PERSONAS TODAVÍA RECURREN A LA MINERÍA ARTESANAL Y MAZAMORREAN EN LOS RÍOS”

“A nosotros nos ven y nos buscan en elecciones. Allí sí se acuerdan de la región, pero de ahí para allá... En la pasada Gobernación conocimos a Temístocles (Ortega) cuando lanzó su campaña y no volvió ni un día en sus cuatro años de gobierno”, cuenta con gran indignación la mandataria local. Y señala que en los últimos años han recibido más apoyo por parte del gobierno nacional a través de la distribución de regalías, con las que pudieron construir la sala de espera del aeropuerto, el polideportivo y pavimentar la Calle Primera. Todas son obras de infraestructura secundaria que no solucionan los problemas de fondo de la comunidad, como la falta de acueducto, alcantarillado y conexión eléctrica.

“ ”

LA MAYOR RESPONSABILIDAD ESTÁ EN LAS MUJERES. CUANDO LLEGARON LOS CULTIVOS DE COCA, LOS HOMBRES SE DEDICARON A ESO, PERO UNO, POR LAS REFERENCIAS DE OTROS LUGRES DEL PAÍS, SABÍA QUE DETRÁS DE ELLA VENÍAN LA MUERTE, EL DESPLAZAMIENTO Y MUCHOS ANTIVALORES QUE TOCABAN A NUESTROS HIJOS...

Mirna Rosa Herrera, docente de una de las escuelas de la cabecera municipal que durante muchos años ha coordinado la Red Matamba y Guasá, rescata la labor que las integrantes de las 22 organizaciones están realizando para preservar la identidad del pueblo afrodescendiente, máxime en el Pacífico donde son víctimas de una triple discriminación por ser mujeres, negras y campesinas.

“La mayor responsabilidad está en las mujeres. Cuando llegaron los cultivos de coca, los hombres se dedicaron a eso, pero uno, por las referencias de otros lugres del país, sabía que detrás de ella venían la muerte, el desplazamiento y muchos antivalores que tocaban a nuestros hijos. Sin embargo, los hombres con el ansia de conseguir la plata, volverse más poderosos y machistas, fueron los primeros en acceder a eso. Muchas mujeres se negaron porque preferían garantizar la comida de sus hijos”, dice Herrera.

Y esa decisión de las mujeres fortaleció la red porque comenzó a gestionar proyectos y a garantizar la soberanía alimentaria a través de la siembra y la cría de animales. *“Muchos hombres se iban sin mirar las consecuencias y terminaban muertos o desaparecidos; por eso la mujer asumió el rol de cabeza del hogar. Con la minería fue lo mismo; además, en la mayoría de los casos, cuando sacaban el oro, dejaban a sus esposas y se iban con otras mujeres. Los hijos beben y malgastan la plata. En cambio, las mujeres cuando sacan oro invierten y mejoran las casas. Hemos sido el pilar del hogar y las encargadas de preservar el saber ancestral”, enfatiza la docente.*



Fracturas del conflicto armado

En los últimos años, los timbiquireños han tenido que lidiar con la presencia de todos los grupos armados en sus territorios. A diferencia de otras regiones del país, e incluso de su propio departamento, que ardieron con las expansiones de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y de las guerrillas durante finales de los años noventa y el principio del nuevo milenio, en Timbiquí “se vivía en paz”.

Sin embargo, su suerte cambió a partir de 2005. Aunque no recuerdan con precisión las fechas y los nombres de quienes transformaron sus vidas por medio de la violencia para ejercer control territorial y apropiarse de las economías ilegales que fueron surgiendo, tienen grabados en sus memorias dos periodos: 2005-2007 y 2010-2012. El primero está relacionado con

el surgimiento de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y la consecuente llegada de grupos “paramilitares”, y el segundo con la aparición de la minería ilegal y la consolidación de las Farc.

“La vida antes era muy bonita. Teníamos una relación de vivir como hermanos, como una sola familia. Todo se fue dañando con la llegada de los cultivos y de la minería”, recuerda una adulta mayor de la comunidad de Cheté, ubicada en la parte alta del río Timbiquí. Para Mireya*, una líder comunitaria desplazada de La Fragua, el periodo de entrada la coca fue peor que el de la minería ilegal porque “hubo muchas desapariciones de nativos, aunque en los últimos años también, pero son más que todo de gente que llega de afuera”.

Esa ola de violencia que se desató en Timbiquí está relacionada con el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales tras la

A pesar de tener una red natural de fuentes de agua, el acceso al líquido vital se ha convertido en una odisea para las comunidades. Almacenan el agua de la lluvia para su consumo.

Foto: Andrés García.

desmovilización colectiva de las Auc ocurridas entre 2003 y 2006 y acordadas bajo el mandato del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

De ello da cuenta un Informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, fechado el 1 de octubre de 2010: “(...) con posterioridad a

...EL PERIODO DE ENTRADA LA COCA FUE PEOR QUE EL DE LA MINERÍA ILEGAL PORQUE “HUBO MUCHAS DESAPARICIONES DE NATIVOS, AUNQUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS TAMBIÉN, PERO SON MÁS QUE TODO DE GENTE QUE LLEGA DE AFUERA”

su desmovilización estos espacios fueron ocupados por los grupos armados ligados al narcotráfico y por las estructuras armadas ilegales surgidas con posterioridad a la desmovilización de las AUC, lo que se refleja en la presencia de integrantes de Los Rastrojos, y Las Águilas Negras en el casco urbano de Guapi y, de miembros de grupos armados articulados al narcotráfico en la cabecera de Timbiquí, lo cual genera zozobra y temor permanente en la población civil”.

Las llamadas ‘Águilas Negras’ se asentaron en la cuenca del río Saija y se tronzaron en enfrentamientos con las Farc. El informe del SAT explica que “Puerto Saija por su ubicación geoestratégica -bocana del río que facilita una rápida comunicación con el mar Pacífico y el puerto de Buenaventura-, se erigió en el principal centro de comercialización de insumos y de distribución de base de coca, lo que originó una disputa territorial entre la guerrilla de las Farc, los grupos ligados al narcotráfico y el grupo armado postdesmovilización de las autodefensas Águilas Negras que determinó la instalación de una base militar de la Armada Nacional, lo cual obligó al despliegue de las Farc hacia las partes medias y altas

“LOS ‘GUERROS’ (LAS FARC) NOS RETUVIERON EN LA ESCUELA. TODOS SALÍAN AL PUEBLO Y ESTABAN COMO SI NADA, SE IBA UN GRUPO Y LLEGABA EL OTRO. ESE DÍA SE ENFRENTARON CON LOS ‘PARAS’ Y NOS RETUVIERON EN LA ESCUELA. NO QUEDÓ NADIE. MUCHOS NO HAN VUELTO POR MIEDO, POR TEMOR DE SER MASACRADOS NADIE RETORNÓ”

del río, y la infiltración de milicianos en el poblado”.

Por otro lado, el accionar de ‘Los Rastrojos’ en el departamento de Cauca estuvo ligado a una alianza que sostuvo con el Eln para enfrentar a las Farc y expulsarlas de los municipios de Argelia y El Tambo, en donde tradicionalmente han existido extensos cultivos de coca y corredores de movilidad que comunican con el Pacífico; a la par aumentaron su control en los municipios costeros. Dicho pactó terminó en enero de 2010, cuando las Farc y el Eln suscribieron un cese de hostilidades en el corregimiento de El Plateado, de Argelia.

Según lo documentó la Defensoría del Pueblo, desde finales de 2010 las Farc avanzaron nuevamente hacia la costa y terminaron por sacar a ‘Los Rastrojos’ de la región. En medio de los combates, quienes llevaron la peor parte fueron las comunidades ubicadas en la parte alta del río Timbiquí, que quedaron en medio de los enfrentamientos y ocurrieron los primeros desplazamientos masivos del municipio.

En tan sólo seis meses se registraron cuatro desplazamientos que dejaron deshabitados dos caseríos: Velásquez y La Fragua. Los hechos quedaron registrados en la sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, dictada el 1 de julio de 2015 a favor del consejo comunitario Renacer Negro. En cada caserío se presentaron dos desarraigos: el primero en Velásquez sucedió en diciembre de 2010 y el segundo el 3 de febrero de 2011; los de Cheté ocurrieron el 7 y el 18 de mayo de 2011.

Clemencia*, una madre de 11 hijos que quedó atrapada en medio de los combates de La Fragua, recuerda que la guerrilla retuvo a la comunidad en un centro educativo durante el enfrentamiento:



“Los ‘guerros’ (las Farc) nos retuvieron en la escuela. Todos salían al pueblo y estaban como si nada, se iba un grupo y llegaba el otro. Ese día se enfrentaron con los ‘paras’ y nos retuvieron en la escuela. No quedó nadie. Muchos no han vuelto por miedo, por temor de ser masacrados nadie retornó”.

Una vez expulsados ‘Los Rastrojos’, se dieron los enfrentamientos con la Fuerza Pública. Entre 2011 y 2012 ocurrieron constantes hostigamientos, la mayoría realizados desde la Calle del Pueblo, una vereda al otro lado del río Timbiquí que fue anexada como barrio al casco urbano.

“Cuando se escuchaba la balacera tocaba salir a correr al pueblo o a San Miguel dependiendo de dónde fueran los tiros. No era todos los días, pero sí generaba mucho temor”, recuerda una joven que ya tenía mecanizada la rutina de salir del caserío buscando refugio y retornar inmediatamente una vez finalizaban los ataques porque no tenía dónde más quedarse.

En una de las arremetidas más fuertes, ocurrida a principios de marzo de 2012 y que se extendió por más de dos días, un comando de las Farc destruyó con un cilindro-bomba el edificio donde operaban

la Alcaldía y la estación de Policía. Esa dramática situación se mantuvo vigente hasta que esa guerrilla decretó su primera tregua unilateral en medio de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En la región afirman que ha sido cumplido permanentemente, con lo cual han respirado un ambiente de tranquilidad que no sentían desde principios de la pasada década.

“

CUANDO SE ESCUCHABA LA BALACERA TOCABA SALIR A CORRER AL PUEBLO O A SAN MIGUEL DEPENDIENDO DE DÓNDE FUERAN LOS TIROS. NO ERA TODOS LOS DÍAS, PERO SÍ GENERABA MUCHO TEMOR.

Presencia estatal de las Farc

Los timbiquireños tienen claro que la minería ilegal marcó un punto de quiebre para las dinámicas del conflicto armado en 2010. Si bien las retroexcavadoras habían empezado a ingresar desde tiempo atrás provenientes del corregimiento Sabaletas, de Buenaventura, Valle del Cauca,

sólo hasta ese año se dio un boom que exacerbó el conflicto.

Así lo estableció la Defensoría del Pueblo en una de sus notas de seguimiento de 2011: “Durante el 2010 la intensificación de la explotación minera con retroexcavadoras y dragas en las partes medias y altas de las cuencas y los afluentes del río Timbiquí intensificaron las disputas entre los grupos armados ilegales Farc y Los Rastrojos debido al interés de estos grupos por controlar el ingreso de trabajadores y personas foráneas a la zona, imponer exacciones y administrar la cotidianidad de los lugareños”.

En un principio, las máquinas eran ingresadas de manera clandestina por foráneos o ‘paisas’ -como denominan a los extranjeros en la región-, quienes buscaban a los propietarios de los predios, ubicados en consejos comunitarios, para negociar las condiciones de explotación.

“Hablaban y acordonaban unos porcentajes, nada era a la fuerza. La zona es consejo comunitario, pero como uno ha venido cultivando sus terrenos desde hace generaciones, el consejo comunitario se lo respeta y uno puede tomar las decisiones que quiera”.



explica alguien que ha trabajado en ese tipo de minería y pide mantener la reserva de su identidad.

Posteriormente, cuando las Farc consolidaron su presencia y se convirtieron en el único actor armado ilegal de la región, empezaron a regular las actividades relacionadas con la explotación aurífera y asumieron un rol sencillo que ‘raya’ con la función estatal: cobrar un porcentaje de lo producido y garantizar que las partes cumplan sus compromisos.

“Ellos (las Farc) siempre han metido mucho control porque como acá ha llegado gente de tantos lados con sus costumbres y mañas, pero ellos siempre han tratado de controlar la situación y de que no se violen sus reglas”, cuentan en la región.

Según le dijeron a VerdadAbierta.com varias personas que han trabajado en diferentes ‘entables’ -sitios en donde operan las retroexcavadoras-, las Farc cobran el diez por ciento de lo extraído, al propietario del lote le corresponde el 14 por ciento, se reparte un dos por ciento para las comunidades para el manejo de aguas sucias y la elaboración de obras, y la parte restante es para el propietario de la maquinaria.



En la región tienen fuerte presencia las Farc, quienes muestran su poder con pancartas alusivas a sus jefes caídos.

La otra función de la guerrilla, dicen en la región, es garantizar que el dueño de las máquinas otorgue los días de barequeo, es decir, que apague las ‘retros’ y permita el ingreso de los habitantes de las comunidades al ‘entable’ para que puedan buscar sus piezas de oro. *“El convenio es que hay cinco días para las máquinas y dos para el rebusque. Lo que la gente se encuentra se lo queda. Hay gente que se hace un millón o dos millones de pesos en un día. Se puede sacar una libra, diez gramos, uno o ninguno. Si no fuera por ellos, seguramente los dueños de los ‘entables’ no le daban a uno el bareque el día que toca”,* cuenta alguien que

ha participado de esas faenas en busca de fortuna.

A pesar de ser un grupo armado ilegal, en la parte alta de Timbiquí aseguran que las Farc respetan a las comunidades y a sus autoridades. *“Desde que ellos empezaron entrar, les dijimos cómo habíamos estado viviendo y que si ellos iban a compartir con nosotros en el territorio también tenían que respetar nuestras decisiones y lo aceptaron. Se les dijo que acá hay un consejo comunitario con su presidente y su inspector, que son las autoridades y nunca se han metido con ellos”,* asegura Luz Aray Hernández, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Santa María.

X

2013

Abril

Nuevas fumigaciones aéreas.

✍

2015

1 de julio

Juez de Restitución de Tierras falla a favor de Renacer Negro.

✍

2015

7 de julio

Las Farc decretan cese al fuego unilateral que se ha mantenido hasta la fecha.

“ELLOS (LAS FARC) SIEMPRE HAN METIDO MUCHO CONTROL PORQUE COMO ACÁ HA LLEGADO GENTE DE TANTOS LADOS CON SUS COSTUMBRES Y MAÑAS, PERO ELLOS SIEMPRE HAN TRATADO DE CONTROLAR LA SITUACIÓN Y DE QUE NO SE VIOLEN SUS REGLAS”



Esas palabras son respaldadas por Clemencia, quien agrega que la comunidad se ha relacionado mejor con las Farc que con los “paramilitares”, porque *“ellos no llegaron a arrebatar las cosas sino a hablar con la comunidad. No es porque la comunidad esté del lado de ellos, pero ellos son los que tienen las armas y en muchas ocasiones ponen orden sin agredir a la comunidad. Qué otras opciones tenemos si la presencia del gobierno acá no opera”*.

Esa falta de presencia efectiva del Estado le hace temer a las comunidades sobre la suerte que afrontarán si el proceso de paz con las Farc llega a buen puerto y se desmovilizan. *“Si se van las Farc, los del consejo comunitario tendrán que tomar la vocería porque si no quedaríamos desamparados. Porque los dueños de las máquinas impondrían su voluntad y nos dejarían sin barequear, ya que la guerrilla garantizaba los dos días de bareque”*, plantea un habitante de una vereda donde la Fuerza Pública quemó retroexcavadoras en agosto.

Además, tienen temor de que otro grupo armado ilegal ocupe el

espacio que dejarían las Farc y vuelva la violencia que padecieron entre 2010 y 2011: *“Estos al menos nos respetan, incluso nos cuidan, pero si entra otro grupo qué pasará. Ese es el temor: se recogen las Farc y quién va entrar a cuidarnos. La guerrilla garantiza seguridad y orden, lo que no hace el Estado”*. Esa es otra de las paradojas que encierra Timbiquí.

Por otro lado, a pesar de que esa guerrilla ha cumplido con el cese unilateral al fuego que decretó el 7 de julio de 2015 para desescalar el conflicto armado tras la emboscada en la que asesinaron a once soldados en la zona rural del municipio caucano de Buenos Aires, no cesaron sus actividades relacionadas con la minería ilegal en Timbiquí. Por

“ ”

SI SE VAN LAS FARC, LOS DEL CONSEJO COMUNITARIO TENDRÁN QUE TOMAR LA VOCERÍA PORQUE SI NO QUEDARÍAMOS DESAMPARADOS. PORQUE LOS DUEÑOS DE LAS MÁQUINAS IMPONDRÍAN SU VOLUNTAD Y NOS DEJARÍAN SIN BAREQUEAR, YA QUE LA GUERRILLA GARANTIZABA LOS DOS DÍAS DE BAREQUE

Ante el poder de las armas, los habitantes de las comunidades se han resignado a que los guerrilleros instalen sus símbolos e imágenes.

más contradictorio que parezca, al respecto, diferentes barequeros señalan que las Farc *“siguieron controlando las actividades y lo agradecemos. Suena mal decirlo, pero son una garantía para nosotros. En ningún momento nos han violado nuestros derechos, por el contrario, los han hecho respetar”*.

Efectos de la fiebre del oro

“La minería ilegal empezó a llegar en 2010, con las ‘retros’. Llegó a veces con el apoyo de uno mismo: muchos desconociendo lo que nos podía traer. Para nosotros fue como una alegría porque antes se pasaba mucho trabajo para sacar un poquito de mina, pero con la tecnología veíamos que era más fácil conseguir la plata. Entonces, nosotros los nativos también la apoyamos en el momento en que llegó. Ha habido de todo: para casi toda la comunidad la minería nos sirvió, el día que no hay se nota de inmediato”, relata la presidenta Hernández la paradójica situación en la que se encuentran las comunidades afro de Timbiquí, que a diferencia de sus hermanos de otras regiones sí permiten explotación con maquinaria.

Los efectos directos de esta clase de minería se han sentido en los ríos. Un informe de la Corporación Autónoma Regional de Cauca de 2012 identificó en el río Timbiquí un *“un aumento desmesurado en las cantidades de cianuro y mercurio, en niveles no aptos para el consumo humano, así como en materia fecal y en*

**LAS RETROEXCADORAS
PERFORARON FEROCESMENTE
LA TIERRA HASTA ALCANZAR
PROFUNDIDADES INCREÍBLES Y
CAUSAR DAÑOS IRREPARABLES
EN EL TERRITORIO.**

Foto: archivo Unidad de Restitución de Tierras.

poco más de 4.400 formas diferentes de coliformes”.

Al respecto, una joven de Calle del Pueblo, a escasos diez minutos de la cabecera municipal, señala que, a raíz de la contaminación, deben recurrir al agua lluvia e ir hasta las quebradas: *“el agua de lluvia es para el uso diario y la otra para lavar la ropa”.*

Aparte del daño ecológico, la minería con maquinaria pesada también ha fracturado las tradiciones de la cultura afrodescendiente. La mayoría dejó de lado la extracción artesanal y la agricultura que aprendió de sus ancestros, para trabajar en los entables de los foráneos o en los de los nativos que en los últimos años se han hecho a sus propias retroexcavadoras.

“Los campos están desocupados y antes había mucha producción de pancoger, por eso toca traer casi todo de Buenaventura. Las personas descuidaron sus actividades tradicionales y se fueron a

barequear o recoger coca en el pasado para conseguir plata más rápido, con lo que se está perdiendo una cultura ancestral”, explica Carmen, una líder comunitaria que le ha dedicado más de la mitad de su vida a la enseñanza.*

Por otro lado, la fascinación que despierta el oro también causó que los intereses de empresas mineras y particulares recayeran sobre el territorio de las comunidades afro, sobre todo en el del consejo comunitario Renacer Negro, ubicado en la parte alta del río Timbiquí. Como si fuera poca la extracción entre ‘paisas’ y nativos, la Agencia Nacional de Minería (ANM) le otorgó títulos de concesión a terceras personas para que extrajeran minerales entre 2007 y 2040 sin cumplir con el requisito de la consulta previa a las comunidades; además, estaba estudiando la solicitud para adjudicar 18 más.

No obstante, en su sentencia del 1 de julio de 2015, el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en





Restitución de Tierras de Popayán, Luis Felipe Jaramillo Betancourt, le ordenó a la ANM la suspensión de dichos títulos y emitió 30 órdenes más para garantizar la protección y la reparación de las víctimas de esa comunidad.

En ese mismo proceso, antes de que se emitiera la sentencia, el magistrado Jaramillo ordenó, el 12 de febrero de 2012, *“la suspensión de toda actividad minera que a cielo abierto y con maquinaria pesada se estuviese realizando en predios del territorio colectivo, al igual que el retiro de toda la maquinaria pesada”*. Sin embargo, esta medida cautelar no se pudo cumplir por las dificultades de orden público y el costo económico que la decisión generó en los habitantes del consejo comunitario.

A petición de los líderes del territorio colectivo, que señalaron no estar de acuerdo con la prohibición, *“por cuanto la comunidad ha avallado, tácitamente, la presencia de la minería en la región y otros son dueños de entables de extracción*

minera”, y ante el compromiso de la comunidad de realizar un proceso de manejo ambiental con los mineros, *“para evitar un choque socioeconómico fuerte en cumplimiento de la medida”*, el juez finalmente decidió levantar la medida. (Ver página 38 de la sentencia).

Esa situación refleja las dificultades que generan la falta de opciones de ingresos, que han llevado a una comunidad que ancestralmente conservó su territorio, a optar por la vía del desarrollo acelerado. Así lo asegura una líder comunitaria de la región: *“Aquí llegó la minería ilegal por falta de presencia del Estado y la acogimos como una opción de vida. Pero conociendo que es ilegal, tenemos que sentarnos con el Estado y preguntarle de qué vamos a vivir. La pelea de los consejos comunitarios y de las comunidades no tiene que ser porque quemaron las ‘retros’, porque nos han traído en términos generales perjuicios, sino cómo las comunidades vamos*

Jornada de barequeo, en la que las máquinas son apagadas para que los nativos entren a buscar fortuna.
Foto: archivo Unidad de Restitución de Tierras.

a empezar a sobrevivir, qué vamos a hacer para restáuranos y volver a la normalidad. Antes se bajaba al río y se conseguía la comida, ahora no”.

Ante todas estas adversidades, ‘Las Matambras’ seguirán persistiendo en su trabajo, sin importar los riesgos. Una de ellas resume el reto al que se enfrentan:

“ ”

SI LOS ANTEPASADOS DE NOSOTROS FUERON RESPONSABLES PARA DEJARNOS TODO DE TAL MANERA PARA QUE VIVIÉRAMOS EN MEJORES CONDICIONES QUE ELLOS, ESA ES LA MISMA RESPONSABILIDAD QUE NOSOTRAS TENEMOS CON LAS GENERACIONES FUTURAS PORQUE ESTAMOS MÁS PREPARADAS.



Puerto Santander, en la ruta de **'las bachaqueras'**

En la frontera colombo-venezolana, cientos de mujeres subsisten gracias al trabajo que supone ingresar y sacar mercancía por las peligrosas trochas que unen a los dos países y que hoy son objeto de disputa entre grupos armados ilegales. Sus vidas están en riesgo.

Por: Ricardo Cruz



De tanto cargar pesados bultos sobre sus hombros, Eugenia tiene su columna vertebral vuelta añicos. Hace poco menos de un año los médicos le detectaron un par de hernias discales que le impiden realizar cualquier esfuerzo físico, por mínimo que sea. Tras conocer su diagnóstico, lo que realmente le dolió fue que ya no podía ganarse la vida como hasta ese momento solía ganársela: pasando sobre sus espaldas toda clase de mercancías provenientes de Venezuela. Pero así fue como levantó sus cuatro hijos luego de quedar viuda a la edad de 22 años.*



Eugenia es oriunda de Puerto Santander, un pueblo ubicado a 60 kilómetros de Cúcuta, pero a escasos metros de tierra venezolana. Basta cruzar un pequeño puente erigido sobre las aguas del río Grita para estar en Boca del Grita, localidad del Estado Táchira. Para llegar a la capital nortesantandereana hay que viajar durante hora y media. Por cuenta de esta cercanía, porteños y “venecos” han construido un complejo entramado social y económico que no repara en divisiones políticas formales.

La frontera ha sido para ambos pueblos tan solo una línea imaginaria que separa una región con los mismos usos y costumbres. La dinámica fronteriza alrededor del trasiego de diversos productos edificó en Puerto Santander un sistema económico dependiente de un intercambio comercial masivo e informal de productos venezolanos.

“Todo mundo ha vivido de eso, de traer cosas de Venezuela para venderlas aquí. Sencillamente no

hay otra cosa más que hacer”, explica Eugenia, quien acepta a regañadientes nombrar dicha forma de rebusque como contrabando y mucho más, pensar que es un delito. Lo suyo es ‘bachaquear’, y nada más.

Durante la época de la Colonia, venezolanos y colombianos idearon formas de intercambiar toda clase de productos burlando los controles tributarios de la Corona española, situación que no solo jalonó la integración entre las jóvenes naciones, sino que también impulsó un comercio que fue floreciendo con el paso de los años. Pero en los albores del siglo XXI, esta actividad fue elevada al rango de delito y hoy es perseguida y penalizada severamente por los gobiernos de Caracas y Bogotá. Con todo y ello, Eugenia prefiere utilizar una palabra muy típica del argot popular venezolano: “yo me he ganado la vida ‘bachaqueando’, como todos en este pueblo”.

En ello no miente. Marta*, por ejemplo, vivió muchos años de vender productos plásticos de origen venezolano. Reside en las afueras de Puerto Santander,

es casada y tiene dos hijos. Para ella, traer y vender productos del vecino país era “un ingreso extra que ayudaba mucho a los gastos de la casa”. Un rebusque sencillo, pero no exento de dificultades: “había que levantarse bien temprano para cruzar la frontera, tipo 4 o 5 de la mañana. Yo conseguía recipientes, jarras...todo esos ‘checheres’ plásticos que sirven mucho para la casa. Allá me salían muy baratos, en promedio a 500 pesos o menos unidad. Esas cosas aquí no se consiguen en menos de 1.500 pesos. Como yo no traía grandes cantidades, simplemente las empacaba en una bolsa o un morral y ya, pasaba el puente y listo. Rara, muy rara vez molestaba la Guardia (Nacional Bolivariana)”.

Se trataba de un rebusque donde no había pierde alguno: la diferencia cambiara entre el Peso y el Bolívar, sumada a la protección de precios de una larga lista de productos venezolanos, justificaba su compra al por mayor. Para ingresarlos abundaban opciones. Había quienes previamente concertaban con un lancharo para que este recogiera los paquetes río arriba, en orilla venezolana.

'Bachaqueras' como Eugenia no vacilaban en cruzar el cauce a pie en tiempos de sequía, cargando sobre sus hombros pesados bultos repletos de mercancías que luego eran vendidas al menudeo en algunos pueblos de Norte de Santander, incluso del sur del César.

Lo otro era transitar por los inhóspitos caminos de herradura que desde los tiempos de la Colonia han construido los habitantes de ambos pueblos para comunicarse e intercambiar mercancías. En esas trochas rigieron durante poco más de una década las leyes del Frente Frontera del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Hoy es la banda criminal 'Los Rastrojos' la que intenta imponer a sangre y fuego sus reglas a los miles y miles de transeúntes que diariamente cruzan la línea divisoria.

Como si fuera poco, desde hace poco menos de dos años las llamadas 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' y una disidencia de estos últimos, conocidos en la región como 'Urabeños', lanzaron una feroz ofensiva para apropiarse de tal dominio. Y ello ha desatado una guerra sin cuartel en Puerto Santander y pueblos vecinos, incluidos los del lado venezolano.

Justamente, bajo el argumento de combatir tanto las redes de contrabandistas generadoras del desabastecimiento que tiene agobiada a su nación, así como la presencia de grupos paramilitares en su territorio, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia en agosto de 2015. Desde entonces, muchas



Con la llegada del Bloque Catatumbo a Norte de Santander no solo se recrudeció la violencia y aumentaron las violaciones a los derechos humanos. También se fortalecieron circuitos de economía ilegal como la producción de alcaloides y el contrabando de combustibles.

Foto: archivo Semana

dinámicas sociales consideradas cotidianas y normales cambiaron drásticamente. El impacto en la calidad de vida de unos y otros es notoria.

Pero lo que no cambia, por más convulsionadas que estén la política y la economía a lado y lado del puente Simón Bolívar es el voluminoso contrabando de gasolina; el constante paso de mercancías; la continua apertura de trochas para burlar los controles de la Policía Nacional y la Guardia Nacional; y el interés de los grupos armados por controlar una frontera inmensa, porosa, estratégica y generadora de riquezas lícitas e ilícitas. Detrás de toda esa dinámica también están 'las bachaqueras', exponiéndose a los riesgos.

El puerto del 'Iguano'

En la historia del conflicto armado en Colombia quizás no exista hecho más anunciado que el ingreso de los paramilitares a Norte de Santander. El otrora máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Carlos Castaño Gil, declaró en entrevista concedida al diario El Tiempo, publicada el 15 de marzo de 1999, que sus hombres llegarían a mediados de ese mismo año hasta ese departamento para arrebatarles a las guerrillas de las Farc y el Eln el dominio territorial, militar y social que históricamente habían construido a punta de fusil.

Y así sucedió. Según lo documentó la Fiscalía 8 de la Unidad de Justicia Transicional (antes Justicia y Paz), el 29 de mayo de 1999 arribaron procedentes de Antioquia poco más de 200 paramilitares al municipio de Tibú, considerada puerta de entrada a la región del Catatumbo. Bajo las órdenes del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, los 'paras' se desplegaron por la carretera que comunica con el corregimiento La

EL CONFLICTO ARMADO EN NORTE DE SANTANDER

**MEDIADOS
DE LOS 70**

**INGRESAN LOS PRIMEROS
GUERRILLEROS DEL ELN A
LA PROVINCIA DE OCAÑA.**

**PRINCIPIOS
DE LOS 80**

FORTALECIMIENTO DEL ELN

Llegan más combatientes del Eln, provenientes de la Serranía del Perijá, con la finalidad de fortalecer las estructuras de los 'elenos' en Norte de Santander, departamento de vital importancia para los intereses de esta guerrilla.

**DÉCADA
DE LOS 80**

**FRENTE DE GUERRA
NORIENTAL**

El legendario sacerdote español Manuel Pérez, quien fuera máximo comandante del Eln, se instala en Norte de Santander, particularmente a la región del Catatumbo, promediando la década de los 80, para dirigir desde allí las acciones de esta guerrilla. Se fortalece el Frente de Guerra Nororiental del Eln, con presencia en César, Norte de Santander y Arauca y comienzan los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas.

**FINAL DE
LOS 80**

APARICIÓN DE LAS FARC

Aparecen las Farc en Norte de Santander, a través de los Frentes 33 y 45. Se les señala de ser los responsables de impulsar los cultivos de hoja de coca en la región del Catatumbo.

1991

DESMOVILIZACIÓN DEL EPL

Luego de la desmovilización del Epl, el frente disidente Libardo Moro del Epl continúa en armas en la región del Catatumbo.

1999

INGRESO DE LAS AUTODEFENSAS

Ingresa a Norte de Santander el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De la mano de Salvatore Mancuso, este bloque paramilitar comienza su sangrienta incursión por todo el Catatumbo.

1999

BLOQUE CATATUMBO

Simultáneamente, nace el Frente Frontera del Bloque Catatumbo de las Auc. Su objetivo es combatir la presencia de las guerrillas en Cúcuta, área metropolitana y la línea fronteriza.

**EL 21 DE
ENERO
DE 2005**

**DESMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE
CATATUMBO**

En la finca "Brisas del Sardinata" del corregimiento Campo Dos de Tibú, 1.437 combatientes del Bloque Catatumbo y el Frente Fronteras de las Auc se desmovilizaron y entregaron sus armas al Alto Comisionado para la Paz.

**FEBRERO
DE 2006**

'ÁGUILAS NEGRAS' Y 'PAISA'

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz -Mapp- de la OEA advierte sobre la presencia de nuevos grupos armados conocidos con el nombre de 'Águilas Negras' y 'Paisas' en municipios como Tibú, Puerto Santander, Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario.

2010

'LOS RASTROJOS'

Según investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- ingresan 'Los Rastrojos' al departamento y terminan absorbiendo a las 'Águilas Negras'. En ese mismo año ingresan las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', también conocidos como 'Urabeños'.

2012

**SE ENFRENTAN LOS 'RASTROJOS'
CONTRA 'URABEÑOS'.**

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emite Informe de Riesgo No 020-12 en el que advierte la delicada situación de orden público que se registra en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia y Puerto Santander, por cuenta de los fuertes enfrentamientos entre 'Rastrojos' y 'Urabeños'.

2016

DIVISIONES

Se conoce divisiones al interior de los 'Urabeños'. Se agrava la situación de orden público en Cúcuta y su área metropolitana.

Gabarra, detuvieron varios vehículos y asesinaron a ocho personas acusadas de ser auxiliares de la subversión. Fue el mensaje sangriento con el que el naciente Bloque Catatumbo anunció su llegada a Norte de Santander. Lo peor es que no sería el único.

De acuerdo con el Ente Investigador, entre la última semana de mayo de 1999 y la primera mitad de agosto del mismo año, los hombres del Bloque Catatumbo asesinaron, en diversos hechos, a 77 personas en zona rural de Tibú y La Gabarra. Lentamente, los municipios del Catatumbo comenzaron a quedar despoblados por cuenta del éxodo masivo de campesinos que huían de la barbarie paramilitar. Y esta parecía no conocer límites. Lo sucedido el 21 de agosto del año en mención en el corregimiento La Gabarra así lo evidencia. (Leer más en: La Gabarra, una historia de abandono)

Mientras dejaba en manos del militar (r) Armando Pérez Betancourt, alias 'Camilo', la incursión paramilitar a través de la espesa selva del Catatumbo, Mancuso ordenó abrir un nuevo frente de guerra. El encargado de dirigir las operaciones militares fue Jorge Iván Laverde Zapata, conocido con el alias de 'El Iguano', quien decidió irse tras las autodefensas de Carlos Castaño a la edad de 17 años. Ocho años después, en mayo de 1999, llegó a Norte de Santander con el rango de comandante del Frente Frontera del Bloque Catatumbo.

Su misión, según lo confesó ante fiscales de Justicia y Paz, fue iniciar una política de sometimiento violento de las poblaciones de



Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario; Aguas Claras, La Floresta; Sardinata, Cornejo, Salazar de las Palmas; Ragumbalia, Chinácota, Pamplona, Cicutilla, Los Patios, Juan Frio, La Alborada y Guaramita. Para ello perpetró en cada una de estas localidades acciones de la mal llamada “*limpieza social*” dirigidas contra presuntos colaboradores de la guerrilla, habitantes de calle, expendedores de droga y raponeros; servidores públicos, líderes estudiantiles y activistas de derechos humanos; y en general, contra todo aquel que se opusiera al orden paramilitar. El rastro de sangre, dolor y muerte que dejó en estas poblaciones es bastante largo, y aún duele.

Pero tanta sevicia en nombre de la “lucha contrainsurgente” escondía otras intenciones, más lucrativas. Para Castaño Gil, como para los máximos jefes de las Auc, controlar Cúcuta y los cinco municipios de su área metropolitana -El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano y Villa del Rosario-, así como la subregión oriental del departamento, le significaba una victoria estratégica que les representaba cortar el paso de

“

EL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES, AUTOPARTES, LICORES Y ALIMENTOS ENTRE OTROS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL CAMBIO DE DIVISAS (...) SE HA CONVERTIDO EN FUENTE DE INGRESOS PARA LOS GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY, QUIENES DISPUTAN EL CONTROL DE LAS RUTAS

las guerrillas hacia Venezuela y asegurar el control de los cientos de corredores naturales –llamadas trochas– existentes en estas localidades para el paso de toda clase de mercancía.

Sin duda un atractivo botín por el que los paramilitares estaban dispuestas a “*matar o morir*”. Y así lo entendió ‘El Iguano’, quien desde el mismo momento de su llegada a tierras nortesantandereanas impuso sus propias reglas en la línea fronteriza: ordenó el cobro de peajes a ‘bachaqueros’ y a todo aquel que se moviera por las trochas; impuso su poder de fuego para regular el contrabando de

gasolina; y utilizó las viejas rutas del contrabando para fortalecer el tráfico de estupefacientes desde Venezuela hacia Europa y Estados Unidos.

Donde se sintió con mayor rigor la llegada de un nuevo orden fue en Puerto Santander, pueblo acostumbrado desde tiempos ancestrales a manejar el intercambio comercial sin mayores regulaciones y mucho menos impuestas por terceros. Quienes se atrevieron a desafiar este nuevo orden de cosas no sobrevivieron para contarlo; quienes lo lograron, quedaron con marcas en sus cuerpos y sus almas que difícilmente olvidarán.

Eugenia, por ejemplo, aún llora al recordar el día en que hombres de las Auc la violentaron sexualmente solo por el hecho de evitar que estos mataran a uno de sus hijos. *“Eso fue como en noviembre de 2001”, cuenta, sin dar más detalles. Solo añade que el detonante fue denunciar ante las autoridades civiles a un hombre que le debía un dinero de unos productos que había traído desde Venezuela por las trochas, como era su trabajo por aquel entonces. Pero el hombre era cercano a ‘El Iguano’ y éste, al enterarse, no dudó en ordenar matar un hijo de la mujer tras considerar la denuncia por incumplimiento de pago como “un detalle de muy mal gusto”.*

“La verdad es que me ha tocado muy duro. ¡Imagínese! Trabajar parejo como un hombre, cargando bultos bien pesados para levantar a mis hijos, quedar sola desde bien joven, pero qué le vamos a hacer, es la vida que me tocó. Y encima

eso...pues yo me fui a hablar con ‘El Iguano’ sin conocerlo, sin saber quién era él y le pregunté: ¿qué pasa con mi hijo? Y yo le conté todo a ese señor y dijo que no le iba a hacer nada a mi hijo, pero desde ese momento comenzaron a martirizarme, a maltratarme, a perseguirme...hasta que me violaron. Me tocó irme para Venezuela como un año”.

Eugenia regresó a Colombia un año después. Se instaló en un pueblito cerca de Cúcuta, donde estuviera lejos de sus más dolorosos recuerdos. Sus cuatro hijos, en cambio, sí decidieron crecer en Puerto Santander y allá la tragedia alcanzó nuevamente su hogar. Un día de marzo de 2009, en las primeras horas de la mañana, abordó el colectivo que siempre tomaba para viajar al Puerto y al llegar, *“me encuentro con la noticia que habían matado al mayor de mis hijos la noche anterior, disque porque tuvo un problema con el duro de los ‘paracos’, porque se puso a defender una mujer”.*

En Puerto Santander – y municipios vecinos- suelen llamar ‘paracos’ a los herederos del Frente Fronteras y Bloque Catatumbo: combatientes de rango medio que nunca se desmovilizaron, otros que sí lo hicieron, pero decidieron regresar a las armas y nuevos jóvenes reclutas que hoy

protagonizan una encarnizada lucha por el control del paso fronterizo. Quienes están llevando la peor parte son los porteños. En medio de una zozobra generalizada y un profundo hermetismo deben soportar los asesinatos, los desmembramientos de cuerpos, las desapariciones forzadas y en general, todos los excesos que se están cometiendo a lado y lado de la frontera.

Aunque muchos de los protagonistas de esta nueva confrontación combatieron para el mismo bando en el pasado, hoy están integrados a los ‘Rastrojos’, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ y los ‘Urabeños’. Un rastreo a la historia de estos grupos muestra qué tan fácil pueden reciclarse las guerras en la frontera.

Dominios de los ‘Rastrojos’

El 25 de septiembre de 2012, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Riesgo No. 020-12 en el que advertía sobre el inminente peligro que corrían los habitantes de Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander y Cúcuta por cuenta del enfrentamiento que en aquel momento sostenían los grupos armados ilegales denominados ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’ por *“el dominio del negocio del*

ADEMÁS DEL NARCOTRÁFICO, EL ÁMBITO FRONTERIZO FACILITA EL TRÁFICO DE UNA AMPLIA GAMA DE MERCANCÍAS QUE PRODUCEN GANANCIAS CONSIDERABLES DEBIDO AL DIFERENCIAL CAMBIARIO Y AL CONTROL DE PRECIOS ESTABLECIDO PARA ALGUNOS PRODUCTOS EN VENEZUELA.

narcotráfico, el contrabando de hidrocarburos, armas y mercancías en la zona de frontera, así como por el control de las actividades de comercio formal e informal”.

Según reportó el SAT, *“además del narcotráfico, el ámbito fronterizo facilita el tráfico de una amplia gama de mercancías que producen ganancias considerables debido al diferencial cambiario y al control de precios establecido para algunos productos en Venezuela. El contrabando de combustibles, autopartes, licores y alimentos entre otros productos, así como el cambio de divisas, además de ser actividades de las que derivan su sustento amplios sectores de la población en la zona de frontera, se ha convertido en fuente de ingresos para los grupos armados al margen de la ley, quienes disputan el control de las rutas y presionan a los comerciantes informales mediante la imposición del pago de cuotas extorsivas y contribuciones forzadas (...) algo que ha pasado a ser una práctica generalizada”.*

Seis años atrás, ‘Los Rastrojos’ no eran más que un puñado de antiguos combatientes de distintos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que, tras las desmovilizaciones colectivas, decidieron continuar en armas y asentarse en Cúcuta y sus alrededores. De acuerdo con la investigación realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), titulada Panorama posacuerdo AUC, este grupo se conoció en sus inicios como ‘Águilas Negras’ y tuvo fuerte incidencia en Puerto Santander, Tibú, Ocaña, Villa del Rosario y sectores populares de Cúcuta.



Fenómeno similar ocurrió con los ‘Urabeños’, que por esos mismos años en que crecían las ‘Águilas Negras’ eran conocidos en Norte de Santander como ‘Paisas’. Pero como ocurrió en otras partes del país, las vendettas internas, las confrontaciones entre unos y otros, el reacomodo de mandos medios luego de alguna captura o muerte y el ingreso al departamento en 2009 de los dos grupos armados ilegales con mayor capacidad de fuego, ‘Los Rastrojos’ y las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’), terminaron por moldear un nuevo conflicto armado de proporciones preocupantes.

Por un lado, tal como lo reseñó el CNMH en su investigación, *“En 2010 se consolidó una alianza entre ‘Los Rastrojos’ y las ‘Águilas Negras’ que resultó sumamente ventajosa para los primeros, pues terminaron absorbiendo a los segundos y proyectándose como estructura predominante entre los grupos armados surgidos luego de la desmovilización de las Auc”.* Sin

“ ”

EL DOMINIO DEL NEGOCIO DEL NARCOTRÁFICO, EL CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS, ARMAS Y MERCANCÍAS EN LA ZONA DE FRONTERA, ASÍ COMO POR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO FORMAL E INFORMAL

embargo, estos chocaron con los ‘Gaitanistas’, quienes ingresaron a Cúcuta ese mismo año, con intenciones de hacerse al control de las rentas legales e ilegales que mueve la frontera.

Desde entonces, el conflicto armado entre estas dos organizaciones no ha tenido tregua. En la Nota de Seguimiento 005-14, de marzo de 2014, el SAT de la Defensoría del Pueblo advirtió que *“la confrontación armada entre los grupos post desmovilizados ‘Los Rastrojos’ y ‘Urabeños’ se tradujo en amenazas, ataques*



“Aquí no hubo desmovilización. Simplemente cambiaron de razón social porque son los mismos en las mismas”, son los comentarios sueltos con los que los pobladores de Puerto Santander, Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta se refieren a sus nuevos verdugos: ‘Los Rastrojos’, ‘Urabeños’ y ‘gaitanistas’.

Foto: archivo Semana

con explosivos, incursiones armadas a las zonas rurales, homicidios selectivos, desaparición forzada, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes y desplazamiento forzado”.

Lo advertido por el SAT tuvo impactos dramáticos en 2014, particularmente en relación con la desaparición forzada y la afectación con las mujeres. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, en ese año se registraron 207 casos, de los cuales 99 tienen como víctimas a mujeres. La falta de datos oficiales no permite establecer cómo se comportó este fenómeno en 2015, entre otras razones porque no se discriminan los datos.

De acuerdo con la Fiscalía, a corte del 31 de julio de 2016, se habían exhumado 198 cuerpos de 171 fosas halladas en el departamento, no obstante, las estadísticas no discriminan los hallazgos por género.

Pero más allá de las cifras, lo que realmente les preocupa a conocedores del conflicto armado en Norte de Santander es que la dinámica de este conflicto armado tiende a recrudecerse.

Violencia que no cesa

“Hoy están en guerra tres grupos armados: Los ‘Rastrojos’, los ‘Gaitanistas’ y los ‘Urabeños’. La gente dirá: ‘pero ‘Gaitanistas’ y ‘Urabeños’ es la misma cosa, ¿cómo que tres grupos? Pues puede que en el resto del país sí sea así, pero aquí no. Aquí surgió una división entre ellos y hay unos llamados ‘Gaitanistas’ y otros llamados ‘Urabeños’. Y todos están en guerra entre sí”, explica Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, organización defensora de derechos humanos.

El gran botín en disputa es Puerto Santander que, con el cierre de frontera, se fortaleció como ruta del contrabando. “Ese municipio tiene una gran ventaja: si no quieres entrar a Cúcuta, pues no entras. Y hay muchas rutas para salir a un punto que se conoce como Astillero (entre Tibú y Puerto Santander) y así evitas todos los riesgos que supone entrar

a Cúcuta. Por eso allá, ‘Los Rastrojos’ tienen maquinaria para organizar las trochas para el contrabando. Si la Guardia Nacional destruye una trocha hoy, dos o tres días después ellos abren carretera con sus retroexcavadoras para que pase el gran contrabando. Y estamos hablando de un contrabando de miles y miles de galones de gasolina, de alimentos, un contrabando más tecnificado, con pagos a las autoridades de aquí y de allá”, sostiene Cañizares.

Así, de acuerdo con el activista, mientras ‘Los Rastrojos’ fortalecen su presencia en Puerto Santander, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ avanzan hacia esta localidad gracias a que ya controlan la frontera desde las localidades venezolanas de San Antonio hasta Ureña. Y ambos combaten a la disidencia ‘Gaitanista’ conocida como ‘Urabeños’.

Sus afirmaciones coinciden con los riesgos advertidos por el SAT de la Defensoría del Pueblo en su Nota de Seguimiento 006-16, de febrero de 2016, donde vuelve a llamar la atención de las autoridades sobre la situación actual de Puerto Santander, Cúcuta y su área metropolitana. Según el documento, hoy se evidencia una fuerte presencia de ‘Rastrojos’, ‘Gaitanistas’ y ‘Urabeños’ en el corredor que comunica Puerto Santander con Cúcuta y Villa del Rosario. Es justamente en esta zona donde se están registrando con mayor contundencia las extorsiones, las restricciones a la movilidad, los homicidios y las desapariciones forzadas.

“HOY ESTÁN EN GUERRA TRES GRUPOS ARMADOS: LOS ‘RASTROJOS’, LOS ‘GAITANISTAS’ Y LOS ‘URABEÑOS’. LA GENTE DIRÁ: ‘PERO ‘GAITANISTAS’ Y ‘URABEÑOS’ ES LA MISMA COSA, ¿CÓMO QUE TRES GRUPOS?’”

“En la cabecera municipal de Puerto Santander – tal como se puede leer en el informe del SAT de la Defensoría - se ha recibido información relacionada con el cobro de extorsiones a la mayor parte de los comerciantes de la zona, las restricciones al tránsito hacia la zona rural de Cúcuta (Agua Clara), así como la presión ejercida sobre los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas y en zonas aledañas, donde los grupos armados apelan a ofrecimientos económicos para atraer a los jóvenes y vincularlos en actividades como cobro de extorsiones y realización de “mandados” que en muchos casos involucran el comercio al menudeo de narcóticos; les entregan motos de alto cilindraje y les ofrecen apoyo económico que en muchos casos resulta ser el único ingreso familiar”.

A pesar de ello, la dimensión y gravedad de este escenario de vulneración de derechos no está siendo registrada por las entidades oficiales. Según la Gobernación de Norte de Santander, entre el 1 de enero y el 30 de junio del presente año se cometieron 107 homicidios en Cúcuta y seis en Puerto Santander. Aunque ambos casos representan un aumento con respecto al mismo periodo de 2015 (66 y 1 respectivamente), hay quienes aseguran que las cifras podrían ser mucho mayores.

Frontera tomada

En agosto de 2015, bajo el argumento de combatir tanto las redes de contrabandistas generadoras del desabastecimiento que padece su país como la masiva presencia de grupos paramilitares, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia. Desde entonces, muchas dinámicas sociales, que hasta entonces eran consideradas cotidianas y normales, comenzaron a cambiar.

El primer efecto lo sintieron los porteños. Julia*, por ejemplo, compraba los productos de su canasta básica familiar en el vecino país dado el diferencial de precios. *“Como allá todo era tan barato pues uno con 10 o 20 mil pesos mercaba y bien bueno. Pero ya no”*, explica la mujer, quien añade que lo peor, desde entonces, son los maltratos de la Guardia Nacional Bolivariana hacia los colombianos: *“por cualquier paquete, por pequeño que sea, le quieren cobrar a uno para dejarlo entrar”.*

Paradójicamente, el cierre de la frontera terminó fortaleciendo el poder criminal de ‘Los Rastrojos’. Hoy, quien quiera transitar por cualquier trocha con intenciones de ingresar mercancía debe pagarle a este grupo armado

ilegal. El contrabando de gasolina, que en el pasado era considerado “un rebusque para quien fuera capaz” está en manos exclusivas del grupo armado. Nadie puede vender una sola gota de gasolina que no sea propiedad de ‘Los Rastrojos’. Nadie puede pasar mercancía por la frontera sin pagarle a ‘Los Rastrojos’.

“¿Cuánto hay que pagar? Pues lo que ellos digan. Si lo ven a uno muy cargado pues le piden bastantico. Mínimo hay que pagarles 50 mil pesos. Y así. Por eso es que ya no es negocio traer cosas de Venezuela porque cobran ‘Los Rastrojos’, cobra la Guardia, cobra la Policía”, cuenta Gloria*, quien también ha dedicado sus años a traer y traer toda clase de productos por esa frontera amplia, impredecible, peligrosa. *“Yo he traído arroz, azúcar, harina, jabón...también he traído pimpinas de gasolina. Eso lo hacía con mi hermano que es lancharo. A veces comenzábamos a eso de la 1 de la mañana y nos daban las 5 de la madrugada nosotros pase y pase gasolina. Pero ya hace rato que no me rebusco con eso”*, cuenta.

De lo anterior son conscientes las autoridades civiles y de Policía de Colombia, quienes desde el cierre de la frontera ordenaron la instalación de cuatro puestos de control permanente en sitios estratégicos para el contrabando, uno de ellos en la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander. Así, de acuerdo con la Policía Fiscal y Aduanera, mientras en 2015 se incautaron más de cinco millones de productos de contrabando en Cúcuta por valor superior a los 21 mil millones

“ ”

“¿CUÁNTO HAY QUE PAGAR? PUES LO QUE ELLOS DIGAN. SI LO VEN A UNO MUY CARGADO PUES LE PIDEN BASTANTICO. MÍNIMO HAY QUE PAGARLES 50 MIL PESOS. Y ASÍ. POR ESO ES QUE YA NO ES NEGOCIO TRAER COSAS DE VENEZUELA PORQUE COBRAN ‘LOS RASTROJOS’, COBRA LA GUARDIA, COBRA LA POLICÍA”

de pesos, en lo que va corrido del año ya se han incautado cuatro millones 779 mil productos cuya cuantía asciende a 14 mil millones de pesos. El combustible, las autopartes, la carne, el calzado, bisutería, entre otros, figuran como los de productos que más ingresan por la frontera ilegalmente.

Según esta misma entidad, en lo que va de 2016 han sido capturadas en diferentes operativos unas 190 personas; de ellas, unas 19 son de nacionalidad venezolana. Por su parte, aunque unas 18 mujeres han sido sorprendidas con mercancía de contrabando, estas no han sido detenidas dado los pequeños montos que cargaban al momento de ser requeridas por las autoridades.

Y es que resulta que, para un grueso número de mujeres de Puerto Santander, Villa del Rosario, Los Patios, La Parada y la misma Cúcuta, “contrabandear” se convirtió en la única –y mejor– forma de subsistir. *“Sencillamente aquí no hay trabajo para la mujer. Dígame dónde me van a dar trabajo a mí, cómo estoy de vieja (sic) y de enferma. Toca contrabandear porque, ¿qué más hago?”*, cuenta Eugenia, quien pese a sus problemas de columna continúa ‘bachaqueando’: *“¡pues claro! Ya traigo cositas más pequeñas como traperas, escobas, tabaco. Eso deja alguna cosita, pero lo cierto es que la cosa sí está bien brava”*.

Ni la Policía Nacional ni la Guardia Nacional Bolivariana logran persuadirla a ella y a cientos de hombres y mujeres que diariamente intentan ingresar todo tipo de mercancías del vecino país para su venta en Colombia, a manera de

rebusque. El verdadero problema, dice, “son los ‘paracos’. No ve que ellos son los que tienen el control de la frontera”.

El drama de las venezolanas

Por esa frontera hoy están cruzando masivamente los venezolanos que, paradójicamente, están encontrando en Puerto Santander los productos típicos de su canasta familiar que ya no encuentran en su país, y algo más. Adriana* vive en un pueblo venezolano llamado Orope. La situación económica la obligó a buscar trabajo en tierras colombianas. En Puerto Santander la emplearon en un local comercial por un sueldo de 10 mil pesos colombianos diarios. No es la única venezolana que hoy se encuentra laborando por mucho menos del salario mínimo legal que rige en Colombia.

Pero la joven “veneca” prefiere hacer oídos sordos pues “eso en bolívares es un platal”. Lo más duro de su jornada, dice, son las cuatro horas diarias de caminata (dos de ida; dos de regreso) que debe hacer por las temidas trochas, donde imperan la violencia, el miedo y la muerte. *“Pues uno de tanto verlos ya ellos (los ‘paracos’, como los nombra la gente) como que también lo van conociendo a uno. Pero si no te conocen, si no les*

pagas, si te metes por otro camino, te va mal. ¿Qué si les tengo que pagar? Pues claro, al principio, pero ya no me cobran”.

Detrás de ello se esconde otro drama. Decenas de trabajadoras sexuales están cruzando la orilla venezolana para ingresar a Colombia. Si bien el ejercicio de la prostitución no es ilegal en tierras colombianas, tanto los ‘Rastrojos’ como los ‘Gaitanistas’, en la zona de frontera; como las guerrillas, en el Catatumbo, están fungiendo como reguladores de esta actividad.

“Y ahí se está generando una situación de alto riesgo para esas mujeres, pues los grupos armados están asumiendo funciones de regulación y eso podría desatar una oleada de violencias contra ellas que corren el riesgo de quedar impunes”, advierte una funcionaria estatal de Norte de Santander que prefirió omitir su nombre.

Pero, con la frontera abierta o cerrada, colombianos y venezolanos concuerdan en algo: hay cosas que no cambian. El contrabando, la corrupción de las autoridades, la presencia de grupos armados ilegales colombianos y la violencia continúan prevaleciendo en esa extensa línea que divide a las dos naciones, sin importar si es la revolución socialista o el neoliberalismo puro lo que rige el destino de uno y otro pueblo.

“Y AHÍ SE ESTÁ GENERANDO UNA SITUACIÓN DE ALTO RIESGO PARA ESAS MUJERES, PUES LOS GRUPOS ARMADOS ESTÁN ASUMIENDO FUNCIONES DE REGULACIÓN Y ESO PODRÍA DESATAR UNA OLEADA DE VIOLENCIAS CONTRA ELAS QUE CORREN EL RIESGO DE QUEDAR IMPUNES”

Mujeres tras el telón de la guerra

Este proyecto es un viaje a cinco regiones donde aún persiste la confrontación armada con el fin de descubrir historias que resaltarán a las mujeres en su condición de líderes sociales y trabajadoras en medio de condiciones adversas, para destacar sus estrategias de resistencia ante los embates de grupos guerrilleros, narcotraficantes y bandas criminales. Con ese fin, se visitaron algunas zonas de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Norte de Santander y Putumayo.

En el intenso trabajo de campo, apoyado por ONU Mujeres Colombia y la Embajada de Suecia, surgieron los estragos sociales derivados del cultivo y procesamiento de la hoja de coca para uso ilícito en el Putumayo; la cruda realidad en las minas de esmeraldas en Muso y Coscuez, Boyacá; las luchas de las mineras en Segovia, Antioquia; la resistencia de las organizaciones de mujeres afro en Timbiquí, Cauca; y los padecimientos de las contrabandistas en Puerto Santander, Norte de Santander. En todos los casos, las mujeres son protagonistas que se resisten a dejarse agobiar por la tragedia.

